



Universidad de  
**San Andrés**

Universidad de San Andrés

Departamento de Ciencias Sociales

Relaciones Internacionales

*La Privatización de la Paz, los efectos políticos y económicos del uso de Empresas de*

*Seguridad Privada: el caso de Estados Unidos en la guerra de Irak.*

*Salvador Ron*

29239-41614674

Francisco Corigliano

## Contenido

Introducción: .....	3
Planteo del Problema .....	5
Hipótesis: .....	6
Revisión de la literatura. ....	7
ESP y sus características .....	9
ESP y sus consecuencias en los conflictos.....	11
ESP en Irak.....	13
Capítulo 1: Las Empresas de Seguridad Privada frente a las Teorías de las Relaciones Internacionales. ...	20
Capítulo 3: Algunas de las empresas de seguridad privada que participaron en Irak. ....	35
Capítulo 4: Abusos en Derechos Humanos de las ESP. ....	42
Capítulo 6: Efectos políticos de las ESP. ....	52
6.1. Efectos políticos desventajosos.....	52
La sobrecontratación: .....	52
La dependencia del gobierno norteamericano hacia las ESP:.....	54
La pérdida del control político:.....	55
El traspaso de funciones: .....	57
La pérdida de balance de control entre el poder legislativo y el ejecutivo: .....	58
Capítulo 7: Efectos Económicos .....	59
7.2 Efectos económicos desventajosos. ....	61
Dick Cheney: problemas con su carrera en el sector privado. ....	62
Conclusiones: .....	65
Bibliografía: .....	69

## **Introducción:**

Cuando el filósofo Immanuel Kant escribió su ensayo “Sobre la paz perpetua”, postuló una serie de artículos preliminares para la paz perpetua de los Estados. Es en el tercer artículo donde sostiene: <Los ejércitos permanentes (*miles perpetuus*) deben desaparecer totalmente con el tiempo>. El filósofo estipula que estos suponen una amenaza de guerra para otros Estados, ya que su disposición a prevenirlas, estimulan al intento de superación para poder prevenir un ataque. El exceso de gastos en armamentos, se transforman en las causas de la guerra. Es por esto que, para Kant, los ejércitos nacionales deberían desaparecer para prevenir la continua posibilidad de amenaza de los países. Qué diría Immanuel cuando en 1965, un grupo de ex-SAS (Special Air Service, o fuerzas especiales británicas), liderados por David Stirling, fundaron la *Watchguard International*, como la primera empresa de seguridad privada que podía ser contratada para atender cuestiones militares y de seguridad (Crowell et al., 2011). Este nuevo fenómeno se presenta como una alternativa para promover la seguridad para las entidades, el objetivo de Kant era explicar una serie de objetivos que los Estados deben cumplir para poder conseguir la paz, de esta forma, estas empresas de seguridad privada, que luego vamos a denominar como ESP, podrían complementar la seguridad que el artículo de Kant pierde con la desaparición de los ejércitos nacionales. Es por esto por lo que esta tesis intenta identificar si verdaderamente estas empresas pueden lograr una paz intentando suplantar los ejércitos nacionales. De esta forma, surgen ciertas preguntas que quizá podamos responder durante este estudio. ¿Cuál es la utilidad de las Empresas de Seguridad Privada? ¿Podrían ellas reemplazar las necesidades intrínsecas de cada nación en torno a la seguridad? ¿Serán efectivas a la hora de tratar con algún potencial enemigo del exterior? ¿Con qué riesgos se enfrenta un país a la hora de implementar los sistemas de seguridad privada? ¿Cuáles son los eventuales efectos políticos de esta implementación?

El estudio de este nuevo fenómeno internacional debe tener en consideración la relación con los estados y cómo estos fueron influenciando su accionar por todo el mundo. Algunos países utilizaron sus servicios para brindar apoyo logístico, otros para luchar contra las guerras que los militares no podían llevar a cabo. Peter Singer en *Corporate Warriors* (Singer, 2003) establece las ESP como: “organizaciones con fines lucrativos que comercian con servicios profesionales íntimamente relacionados con la guerra. Son entidades corporativas que se especializan en la provisión de habilidades militares, incluidas las operaciones de combate táctico, la planificación estratégica, la recopilación y el análisis de inteligencia, el apoyo operativo, el entrenamiento de tropas y la asistencia técnica militar.” (Singer, 2003).

Las empresas de seguridad privada son una extensión del área militar que provee servicios y asesoramientos de carácter militar o de seguridad específica, “El desarrollo de nuevos y sofisticados sistemas de armas hizo que el personal militar dependiera más de los contratistas para el apoyo técnico, lo que provocó que aumentara el despliegue de contratistas en el teatro de operaciones con tropas.” Este es uno de los principales motivos por el cual se explica este fenómeno, por parte de la autora Deborah Avant (Avant, 2005). El crecimiento de las ideas de privatización en los Estados Unidos durante los últimos años del siglo XX, definieron un camino para aquellos militares que buscaban una posibilidad de trabajo (Singer, 2003; Richemond, 2007). Después de la Guerra Fría, un tercio del personal militar de las grandes potencias fue descompuesto, en orden de la paz mundial, esto llevó a que el número de militares desempleados escalara a niveles muy altos (Avant, 2005; 2006). Al mismo tiempo, nuevos conflictos de corto plazo generaron que las tropas americanas fueran desplegadas de manera más rápida. De esta forma, el crecimiento del desempleo militar, y la necesidad de desplegar fuerzas armadas más rápido, llevaron a un crecimiento de los servicios militares y de seguridad privada.

Luego de la Guerra Fría, las ESP, supieron complementar las capacidades militares de países como Estados Unidos, en pequeños conflictos llevados a cabo en regiones como el Golfo Pérsico, o en otros países, como Haití o Somalia o Sierra Leona (Binningsbø & Dupuy, 2009; Jarle Hansen, 2012; Akcinaroglu & Radziszewski, 2013; Faulkner et al., 2019). Debido a que los hechos cambiantes en el mundo se precipitaban velozmente, fue necesario el despliegue de personal de combate de manera rápida para poder atacar amenazas antes de que se hicieran evidentes y tangibles. Es por esto por lo que el Departamento de Defensa (DOD), recibe la capacidad intrínseca de poder encargarse de la contratación de las ESP por parte del gobierno de los Estados Unidos en los conflictos siguientes para el país (Schwartz, 2011; Peters, 2021).

De esta manera, el DOD, es una agencia con la autoridad y las capacidades de contratar estas empresas. Debido a la alta demanda en que estos despliegues fueran lo más rápido posible, la participación del congreso era casi nula en la contratación. Más adelante vamos a ir viendo el rol del congreso, que, si bien no participaba en la contratación, sí tenía relevancia a la hora de pautar el escenario donde las ESP actuarían (Cook, 2002; Schwartz, 2011).

### ***Planteo del Problema***

Las ESP son nuevas a la hora de involucrarse en conflictos de larga escala como lo fue Irak, por lo que su participación genera tanto ventajas como desventajas para sus empleadores. El gobierno estadounidense gozó y sufrió del despliegue de las ESP como método de apoyo para las fuerzas armadas, la participación de estas empresas sacó a la luz los nuevos problemas que los gobiernos enfrentan cuando se trataba con ESP en conflictos de larga índole. El objetivo de este texto es hacer un análisis político de las Empresas de Seguridad Privada, su implementación en la Guerra de Irak, y las repercusiones políticas que estas generaron para el gobierno de los Estados Unidos. Se

intentará responder a la pregunta de, ¿Cuáles fueron los efectos políticos del uso de las ESP (Empresas de Seguridad Privada) por parte de Estados Unidos en el periodo de la Guerra de Irak 2003-2011? La guerra de Irak sirve de escenario para evaluar los beneficios y los costos políticos en relación con la utilidad de las ESP.

***Hipótesis:***

De esta forma surgen tres hipótesis que se demuestran en este estudio. Mientras las dos primeras están relacionadas con las ventajas con el uso de ESP a corto plazo, la tercera hipótesis se refiere a las desventajas del uso de dichas empresas cuando el conflicto en el que están involucradas se prolonga en el tiempo.

Hipótesis 1: el uso de ESP responde a la necesidad de un país como Estados Unidos de suplir una demanda de personal en varios rubros del ejército donde luego de la guerra fría, gracias al desarme de las potencias, se redujeron las capacidades militares de dichas potencias en general y las de Estados Unidos en particular.

Hipótesis 2: el uso de ESP responde a la necesidad de un país con trabas constitucionales para intervenir militarmente en el exterior como los Estados Unidos.

Hipótesis 3: en la medida en que el involucramiento de las ESP en un conflicto o conflictos externos determinados se prolonga en el tiempo, los beneficios de corto plazo asociados al uso de las ESP se ven neutralizados por sus costos políticos y económicos para el o los gobiernos de turno. Esto se debe a que las empresas generan efectos de sobrecontratación; dependencia del gobierno a las ESP; y pérdida de balance de poder entre ejecutivo y legislativo. Lo cual puede ser traducido a tres situaciones peligrosas para el funcionamiento de la democracia norteamericana.

Con el objetivo de demostrar estas hipótesis, este estudio se va a desarrollar con un método de estudio cualitativo, mediante el uso de fuentes de información tanto académicas como periodísticas. Desde el reconocimiento de este fenómeno como un nuevo actor en el escenario internacional, a la necesidad imperiosa de generar mecanismos de control y evaluaciones extensas antes del despliegue de estas empresas, las reflexiones finales aportan algunos elementos cuya incorporación contribuirán a la manera en la que se deben tomar estas decisiones con respecto a los costos y beneficios que estas proveen.

### ***Revisión de la literatura.***

Hay dos tipos de investigadores con respecto a las ESP, que responden a dos campos de estudio diferentes. Por un lado, se destacaron los trabajos de politólogos y académicos, y por el otro, el trabajo de periodistas. Ambas fuentes de información van a ser utilizadas en este estudio. No se distinguen diferencias claras entre los académicos y los politólogos, ambos presentan argumentos y posturas similares, la única diferencia entre estas posiciones, es la forma en la que se expone la información, por un lado, los académicos presentan ensayos con más información sobre el marco contextual. Mientras que los periodistas, en su mayoría, destacan eventos específicos en los que las Empresas de Seguridad Privada se vieron envueltos. De todas formas, Ali Kemal Dogru (Dogru, 2010), distingue tres tipos de posiciones con respecto a lo que plantean tanto los académicos como los periodistas. Estos son aquellos que se postulan como oponentes, proponentes e imparciales<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Proponentes: Isenberg, D. (2009). *Shadow Force: Private Security Contractors in Iraq*; Schwartz, M. (2011). *The Department of Defense's Use of Private Security Contractors in Afghanistan and Iraq*; Singer, P. W. (2003). *Corporate Warriors The Rise of the Privatized Military Industry and Its Ramifications for International Security*; Petersohn, U. (2017). Private Military and Security Companies (PMSCs), Military Effectiveness, and Conflict Severity in Weak States,  
Oponentes: Elsea, J. K.(2008). *Private Security Contractors in Iraq: Background, Legal Status, and Other Issues*. 60; Leander, A. (2005). *The Market for Force and Public Security: The Destabilizing Consequences of Private Military Companies*; Richemond, D. (2007). *The New Peacekeepers? Private Military Companies and the Future of Peacekeeping Operations*

Los oponentes hacen postulaciones desde una perspectiva ética, en la mayoría de los casos, estos promueven los impactos negativos y las desventajas que las Empresas de Seguridad Privada proveen (Faulkner et al., 2019). Partiendo de la base de que el objetivo principal de las empresas es la ganancia monetaria, los oponentes usan ese fundamento para explicar que no son confiables a la hora de integrarlos al ámbito militar. Al no estar reguladas, estas empresas trabajan bajo pocos estándares legales, llevándolas a cometer crímenes y abusar de esa falta de responsabilidad (Elsa et al., 2008; De Nevers, 2009). Los oponentes ven una dificultad a la hora de diferenciar a los grupos de mercenarios con las Empresas de Seguridad Privada.

A diferencia de la lectura ética de los oponentes, los proponentes miran la cuestión desde una perspectiva pragmática y argumentan que mientras exista la necesidad de usar Empresas de Seguridad Privada, la dependencia hacia estas va a seguir. Estos investigadores consideran que las Empresas de Seguridad Privada son contratadas para suplir con la deficiencia de las fuerzas convencionales a la hora de tratar con circunstancias inadecuadas para estas últimas<sup>2</sup>. A diferencia de los oponentes, los proponentes destacan que las Empresas de Seguridad Privada son diferentes a los mercenarios debido a su nivel de organización<sup>3</sup>. También, una de las principales

---

Imparciales: Avant, D. D. (2006). *The Privatization of Security: Lessons from Iraq*; Abrahamsen, R., & Williams, M. C. (2007). *Securing the City: Private Security Companies and Non-State Authority in Global Governance*; Bjork, K., & Jones, R. (2005). *Overcoming Dilemmas Created by the 21st Century Mercenaries: Conceptualizing the use of private security companies in Iraq*; Schreier, F., & Caparini, M. (2005). *Privatizing Security. Private Military and Security Companies*; Taylor, T. (2011). *Private security companies in Iraq and beyond. International Affairs*.

<sup>2</sup>El uso de las EMSP como un nuevo instrumento de política exterior, particularmente de los EE. UU., puede deberse a una serie de circunstancias: (a) la falta de recursos humanos en las fuerzas armadas; (b) que las ESP se consideren más rentables; (c) nepotismo y/o buenos contactos con la Administración; (d) para eludir la responsabilidad por los actos cometidos por las ESP; (e) evitar el control de las instituciones democráticas; (f) intervenir en los asuntos internos de un país (Gómez, 2012).

<sup>3</sup>Los mercenarios tienen un nivel de organización en pequeños grupos e incluso individualmente, con tiempos a corto plazo, con capacidades limitadas a un solo cliente y con puros motivos económicos. Por el otro lado, las ESP tienen un nivel de organización empresarial de numerosos colaboradores, trabajando con tiempos a largo plazo, donde pueden dar servicios a varios clientes al mismo tiempo buscando así, un beneficio empresarial, no solo económico, sino también político y legal (Arroyo, 2022).



características de los proponentes, es que estos siempre destacan las ventajas de las Empresas de Seguridad Privada, como los costos, la velocidad de despliegue y la especialización de las tropas (Richemond, 2007).

Por último, los imparciales se presentan como académicos y periodistas más objetivos que los proponentes y los oponentes con respecto a las Empresas de Seguridad Privada. Estos tienden a ser más imparciales con respecto a los temas que tratan, sin tomar un partido tanto en contra como a favor. El objetivo principal de estos es hablar sobre la realidad de la industria, y cómo estas empresas juegan un rol clave en la guerra moderna, y los mecanismos para regular estas entidades (Serrano & Martín, 2007), no hablan específicamente sobre las ventajas y desventajas, pero sí les dan importancia a estas cuestiones.

De modo que este estudio va a nutrirse de las dos ramas de pensamiento; ellas permitirán introducirnos en el análisis de la presencia de las ESP en la guerra y en sus repercusiones apoyándonos en la evidencia empírica y en sus opiniones conducentes a formular una conclusión respecto al trabajo de las ESP en la guerra de Irak.

### **ESP y sus características**

Las empresas privadas de seguridad o militares son definidas como entidades legales que proveen un gran espectro de servicios tanto militares como de seguridad a diversos actores. En su mayoría, entrenamiento militar y de seguridad, apoyo logístico y tareas de combate. El mercado en el que trabajan estas empresas tiene todo tipo de clientes, otras empresas que necesitan mantener sus intereses, organizaciones internacionales, incluso países. Para muchos gobiernos, la seguridad privada o militar representa un recurso muy atractivo para aquellos países con fuerzas armadas débiles o no presentes y países que enfrentan amenazas fuera de sus capacidades.

Es importante ver cómo estas empresas interactúan entre ellas y con otros organismos, claramente como en todo mercado, hay competencia entre estas compañías, pero la literatura propone que una vez que una firma obtiene un contrato, en la mayoría de los casos, existe cooperación entre las empresas. Sobre todo, cuando los contratos representan demasiado para que una sola firma se ocupe de todo (Cook, 2002; Richemond, 2007; Petersohn, 2017).

Para este trabajo es importante tener una buena idea de lo que son las ESP y lo que representan. Si bien el término de empresa de seguridad privada no se acogió hasta la década del 90, este fenómeno venía de años anteriores. En la década del 70, empresas inglesas ya habían arrancado a ofrecer servicios de seguridad y entrenamiento militar, consultoría y apoyo logístico. En los principios de los 90, estas firmas “se habían profesionalizado en actores corporativos, expandido en tamaño, y aumentaron su portafolio de servicios” (Petersohn, 2017, pp. 2).

Como todo negocio, las ESP son guiadas por las fuerzas de la oferta y demanda, las cuales crecieron en gran medida durante el periodo de post Guerra Fría. Estas firmas se enfocan en tres aspectos específicos, relacionados, pero también diferenciados (Taylor, 2011; Petersohn, 2017). Primero y principal, su participación en campañas militares de los grandes gobiernos de Occidente, donde su trabajo es el apoyo tanto logístico, como militar. Segundo, en países donde la seguridad era un riesgo, pero se benefician de cierto grado de estabilidad política, estas empresas suministraban entrenamiento de las fuerzas estatales para complementar los fallos de las capacidades gubernamentales. En la mayoría de los casos, estos entrenamientos están financiados por inversores extranjeros, ya que estos pretenden mantener sus intereses en esos países. Tercero y último, en países con gobiernos débiles o fallidos, donde las empresas de seguridad privada son contratadas para asegurar la supervivencia del régimen, o, al contrario, la caída de un régimen (Taylor, 2011).

Es imperioso destacar la diferencia entre los mercenarios y los soldados privados, ya que puede ser producto de confusiones. Hoy en día, las ESP están organizadas sobre una idea corporativa que marca una clara obligación hacia sus clientes. Los objetivos de estas firmas son, mejorar las capacidades militares de sus clientes y mejorar la capacidad militar en una guerra, o en evitar una (Cook, 2002). A diferencia con los mercenarios, estas empresas defienden su profesionalismo, entrenamiento y organización, se presenta cierto grado de responsabilidad, el cual no existe en el caso de los mercenarios.

### **ESP y sus consecuencias en los conflictos**

En investigaciones recientes, se demuestra que el uso de empresas de seguridad o militares privadas durante un periodo de guerra puede afectar la capacidad militar de las partes. Aquel país, u organización que contrata estos servicios, recibe un apoyo logístico conforme al contrato que haya conseguido con la ESP. Este apoyo funciona conforme a los intereses del empleador, y mejora las capacidades para tratar con los conflictos en los que se enfrentan, ayudando a resolver las disputas más con rapidez y más efectivamente. De todas formas, la presencia de ESP también hace que el conflicto escale en intensidad, “Esta mayor gravedad no se debe a una sed de sangre en particular, sino que es el resultado de las ESP cumpliendo con sus obligaciones contractuales” (Petersohn, 2017, pp. 21).

Otros investigadores decidieron optar por un enfoque más temporal. Argumentan que mientras mayor sea la cantidad de ESP contratadas por un gobierno, hay una gran posibilidad de que los conflictos duren menos tiempo que aquellos conflictos con poca presencia de ESP (Akcinaroglu & Radziszewski, 2013). Este estudio también propone una teoría muy interesante sobre el comportamiento de las ESP. “A medida que aumenta el nivel de competencia entre las ESP

contratadas por el gobierno, es más probable que presten servicios óptimos y ayuden a poner fin a la violencia” (Akcinaroglu & Radziszewski, 2013, pp. 1). Por otro lado, mientras haya una menor presencia de ESP, esas empresas tenderán a cumplir sus obligaciones intentando maximizar sus ganancias, debido a que hay menos mecanismos de control para las empresas (Akcinaroglu & Radziszewski, 2013).

Las ESP han probado ser útiles no sólo en cuestiones estatales o privadas, sino que han cumplido muchos contratos con organismos internacionales como la ONU. “La industria privada militar y de seguridad ofrece cada vez más servicios que abarcan algunas de las actividades y tareas básicas de las Naciones Unidas (...) en operaciones humanitarias y de mantenimiento de la paz, misiones políticas o como parte del trabajo habitual de las oficinas del país” (Royal Norwegian Naval Academy & Østensen, 2011 pp. 6). El libro propone que las condiciones mundiales presentan nuevos desafíos para las Organizaciones Internacionales como la ONU, donde estas se encuentran con muchos vacíos operacionales que tienen que llenar. Estos vacíos son cubiertos por las ESP. De todas formas, el uso de estas empresas por organizaciones como la ONU generan ciertos dilemas, tanto operacionales como políticos, que hace que su uso tenga que ser aún más restrictivo por parte de las Organizaciones Internacionales.

Un problema que varios autores ven a la hora de operar con ESP, es la transparencia, principalmente porque estas empresas son privadas, y no tienen la obligación de presentar su información al público. Este factor constituye un obstáculo para los estudios académicos y periodísticos sobre esta cuestión ya que se vuelve muy difícil poder hacer un análisis cuantitativo de sus contratos. En la ausencia de datos crudos sobre las ESP, puede suceder que los académicos dejen de lado información relevante para evaluar la real influencia de estas empresas en los conflictos (Avant, 2005; Bures, 2005; Leander, 2005).

Algunos autores proponen que, para los gobiernos, el crecimiento de este mercado militar o de seguridad privada, representa una gran oportunidad para llenar algunos vacíos que tengan con respecto a la seguridad (Spearin, 2005). Incluso, en algunos casos, la adopción de empresas de seguridad privadas dentro del sistema de seguridad estatal puede evitar el colapso de un régimen, e incluso, mejorar las condiciones del país (Spearin, 2001). De todas formas, algunos académicos afirman que las ESP son fuerzas desestabilizadoras en conflicto. A diferencia de las fuerzas de seguridad públicas, estas solo responden a los accionistas de la empresa, pero no a los gobiernos (Akcinaroglu & Radziszewski, 2013).

### **ESP en Irak.**

Teniendo en cuenta el caso que más nos interesa, el estudio de caso clave de esta tesis es, la presencia de ESP en Irak 2003-2011. Primero y principal, es pertinente explicar que el de Irak no es el primer conflicto que tiene la presencia de empresas militares privadas, pero si es el momento histórico que marca la necesidad de esclarecer en mejor medida, los límites que hay entre actividades civiles y militares, lo que genera nuevos riesgos para la ayuda humanitaria. El problema principal que marcan los especialistas en esta cuestión es que, al no ser tan grande la línea divisoria entre misiones humanitarias y militares, el pueblo iraquí vio todas las misiones por igual. “El uso de empresas de seguridad privada en la protección de la reconstrucción y la ayuda del sector privado no permite que la reconstrucción y la ayuda sean suficientemente diferenciadas a los ojos de la población iraquí” (Bjork & Jones, 2005, pp. 789). En otras palabras, los soldados van a ser siempre soldados, estén defendiendo un convoy militar o una reserva de agua. Esto genera que la ayuda humanitaria y de reconstrucción sea difícil de implementar por lo inseguro que puede ser el ambiente en el que se trabaja.

Después de las tropas estadounidenses en Irak, las tropas de las ESP representaron el segundo grupo de fuerzas armadas más grandes en dicho país. Un claro ejemplo fue que para 2003, muchos de los sistemas de armamento más desarrollados de la época, estaban siendo manejados por empresas privadas, ya que como mencionamos anteriormente, el ejército americano, no tenía el conocimiento o el entrenamiento suficientes para poner a sus soldados en esas armas. Además, las prisiones en Irak estaban siendo manejadas por empresas privadas, también se encargaban de interrogatorios a personal de las fuerzas iraquíes (Bjork & Jones, 2005).

De esta forma, se puede ver una gran influencia de empresas privadas en el conflicto de Irak, esto se debió a que la guerra se había vuelto más difícil y compleja para los países, por lo que el sector militar se vio sobrepasado, necesitaban delegar ciertas funciones. Ahí entra el rol de las ESP, cumplir con las tareas que los ejércitos no podían hacer, se presentaron como un complemento a las fuerzas armadas (Avant, 2005).

También, es importante destacar que, en Irak, todos los países de la coalición optaron por utilizar empresas privadas, principalmente nacionales, lo que genera distinciones importantes entre las empresas (Avant, 2006). Un claro ejemplo de responsabilidad delegada a estas firmas es la protección de las bases militares, por ejemplo, el Reino Unido, protege sus bases con personal militar propio, mientras que los Estados Unidos, agrega personal privado a la protección de sus bases en Irak (Taylor, 2011). Esto indica que hay grandes diferencias entre las empresas privadas, las cuales están marcadas por la influencia nacional de su país de procedencia. El autor agrega que claramente hay una efectividad gracias a las empresas privadas, pero le preocupa el grado de cooperación que existía en esta guerra, “Está claro que con frecuencia en Irak un contratista de seguridad probablemente no sabía lo que estaban haciendo sus compañeros (pero rivales) contratistas” (Taylor, 2011 pp. 450). Lo mismo sucedió con la relación civil-militar “Tampoco lo

hicieron los comandantes de las fuerzas militares estadounidenses. La protección privada del movimiento de una amplia gama de personas y mercancías generó confusión” (Taylor, 2011, pp. 450).

De todas formas, en general, hay un límite al uso activo de contratistas, en el caso de Irak, la presencia de soldados privados en el campo de batalla fue muy limitada. Se enfocaron más en tareas de interpretación, interrogación y análisis de inteligencia, siempre bajo la dirección militar (Taylor, 2011). El transporte también es un claro ejemplo de las limitaciones en las actividades de las ESP, durante la guerra de Irak, se dedicaron a transportar suministros de un lugar a otro. Esta actividad representa el mayor riesgo para las empresas privadas, ya que estos convoyes de transporte de vez en cuando son atacados por las fuerzas enemigas, de esta forma, entran en juego los soldados privados, que ofrecen apoyo militar a estos convoyes (Taylor, 2011).

La literatura previa con respecto a los efectos políticos del uso de empresas militares de seguridad privada se diferencia en los “beneficios” y en “costos políticos” (Leander, 2005; Avant, 2006; Dogru, 2010). Básicamente la discusión se centra en aquellos que consideran mayores los beneficios a los costos políticos del uso de las ESP, y viceversa. Por eso a la literatura previa la voy a diferenciar por enfoque, los autores que consideran que las ESP proveen beneficios políticos y los que postulan que los costos políticos son mayores. Esa es la discusión general que va a presentar mi tesis.

Con respecto a un enfoque más sobre la cuestión en sí, en la guerra de Irak, los autores postulan diferentes opiniones. Una que está muy presente se basa en que al no ser tan grande la línea divisoria entre misiones humanitarias y militares, el pueblo iraquí vio todas las misiones por igual. “El uso de empresas de seguridad privada en la protección de la reconstrucción y la ayuda del

sector privado no permite que la reconstrucción y la ayuda sean suficientemente diferenciadas a los ojos de la población iraquí” (Bjork & Jones, 2005). Esto demuestra un repudio por parte del pueblo iraquí hacia estos tipos de empresas.

A nosotros nos interesa más las cuestiones políticas y económicas que se fueron desarrollando durante la guerra con respecto a las empresas militares de seguridad privada. La literatura muestra que hubo más ventajas políticas que desventajas en el uso de las ESP (Zarco, 2012). Como lo explica Deborah Avant, “enviar contratistas privados que trabajan con fines de lucro, de su propia elección, no requiere el mismo nivel de movilización política que enviar tropas nacionales al servicio de su país.” esto se debe a que los líderes del congreso sabían que el público americano estaba menos interesado por él envió de contratista a Irak que el personal militar (Avant, 2006). Esto quiere decir que el gobierno podría enviar soldados, sin tener el ataque de la sociedad, tal como sucedió en Vietnam. Al tener la presencia de un ejército nacional en un conflicto militar, la rentabilidad política es baja, representa mayores problemas para la clase política. Por otro lado, el poco control sobre la utilización de la industria privada militar y de seguridad se volvió una ventaja para los gobiernos, ya que estas empresas ofrecen a los Estados un margen político de maniobra más grande (Zarco, 2012). Se genera mayor seguridad para los militares, también disminuye la presión pública con respecto a la guerra, ya que las bajas en combate por lesiones o por fallecimiento de los contratistas de las ESP, no están incluidos en el conteo oficial de bajas de la guerra, por lo que no llegan al público (Avant, 2006).

Aunque Estados Unidos ha recurrido muchas veces a estas empresas militares de seguridad, para el periodo de la guerra de Irak, no tenían mecanismos de control suficientes para manejar y controlar estas empresas. Lo cual generaba debates políticos referentes al sobregasto, violación de los derechos humanos y el cumplimiento de los objetivos militares (Elsea et al., 2008; Dogru,



2010; Zarco, 2012). Hoy en día, existen mayores mecanismos de control, provenientes de las diferentes experiencias con respecto a la utilización de ESP en las décadas pasadas, por ejemplo, la guerra de Irak ayudó a establecer las bases de una mejor distribución de las tareas, de forma que no se generara una gran dependencia hacia las Empresas de Seguridad Privada que proveían tareas indispensables para el ejército. Se llevo a cabo una mejor delimitación de las tareas correspondiente de los contratistas. En el ámbito legal también se hizo una gran mejora en la responsabilidad de las ESP, en 2008 se firmó el Documento Montreux, destinado a promover el respeto por el derecho internacional humanitario y los derechos humanos siempre que ESP estén presentes en conflictos armados (ICRC, 2020).

Vale destacar que, en un momento inicial de la guerra de Irak, Estados Unidos no era el único país con presencia militar en dicho país. España y el Reino Unido también tenían soldados interviniendo en el conflicto. Cuando estos últimos se retiran del conflicto este cambio hizo que Estados Unidos fuera a necesitar más contratistas para suplir la deficiencia militar dejada por España y el Reino Unido. Tal como explican Deborah Avant y Peter Singer, la retirada de España y el Reino Unido y la necesidad de emplear más ESP para suplir esa falta de personal, genero una sobre contratación de ESP. Dicha sobrecontratación, a su vez, generó un desequilibrio de poder entre los poderes Ejecutivos y Legislativos. Al ser la contratación de las ESP un rol del Departamento de Estado, y del de Seguridad, la rama ejecutiva gana mucho poder frente a la rama legislativa, el congreso, ya que no necesita autorización para ejecutar la contratación de estas empresas. De esta forma, el balance entre estos poderes desaparece, ya que el legislativo no tiene posibilidad de regular al ejecutivo cuando se trata de la contratación de ESP (Avant, 2006; Zarco, 2012).

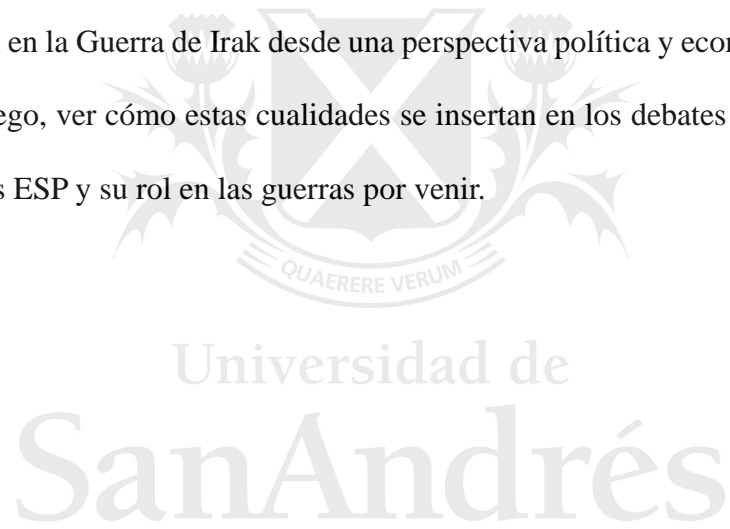
Por otro lado, los lazos entre políticos y Empresas Militares y de Seguridad, generaron problemas de corrupción y sobregasto, ya que varios casos generaron escándalos por malversación de las altas sumas de dinero en cuestión, como también por los problemas generados a partir de su contratación. Esto, sin duda, promovió la desconfianza hacia el poder político (Zarco, 2012). El ex vicepresidente Dick Cheney protagonizó uno de los casos más emblemáticos de la corrupción de las ESP y los gobiernos, cuando durante la guerra se lo relacionó con la empresa Halliburton, la cual tenía varias irregularidades a la hora de operar en Irak. La relación de Cheney con esta empresa fue que él, ex vicepresidente había sido CEO de Halliburton años antes de llegar a la Casa Blanca. Durante la Guerra de Irak, Halliburton había recibido contratos sin la necesidad de licitación contra otras empresas, mientras que Cheney todavía recibía dinero por su trabajo en la empresa, por lo que se le vinculó con las actividades e irregularidades de Halliburton (Chatterjee, 2003; Zarco, 2012).

Por último, en el último argumento sobre las repercusiones políticas, está el del traspaso de las funciones. El gobierno delegaba ciertas funciones a las ESP que generaban un obstáculo para los militares, ya que se creaba un conflicto de intereses (Avant, 2006). Otra cuestión que tiene que ver con la delegación de funciones, tiene que ver con el manejo de la información. El Estado debía cederles información confidencial a estas empresas, información que luego podría ser usada por parte de las empresas para seguir sus intereses.

El texto que sigue se estructura de la siguiente manera; El primer capítulo dará inicio mediante una explicación de este fenómeno por medio del sustento en las Teorías de las Relaciones Internacionales, para tener un mejor entendimiento de los roles que estas cumplen en los conflictos, y el que cumplieron en la Guerra de Irak. El segundo capítulo hace énfasis en algunos antecedentes del uso de contratistas en otros conflictos previos a la Guerra de Irak, explicando el nacimiento y

el crecimiento de estas. Luego, destacaremos algunos casos emblemáticos en los cuales las ESP se vieron envueltos en un capítulo donde se muestran los abusos de derechos humanos que estos contratistas cometieron. El capítulo cuatro muestra algunas de las ESP que participaron apoyando al ejército estadounidense en Irak, con algunos datos que nos ayudan a entender cómo trabajaban en el campo.

Es pertinente armar un marco legal para poder tener un entendimiento de dónde y en qué ámbito legal, operaban estas empresas, por lo que el siguiente capítulo consta de un análisis legal de las ESP en Irak. Luego, se realiza un balance general acerca de los beneficios y costos que estas empresas generaron en la Guerra de Irak desde una perspectiva política y económica, los capítulos seis y siete, para luego, ver cómo estas cualidades se insertan en los debates más generales sobre la legitimidad de las ESP y su rol en las guerras por venir.



Universidad de  
**San Andrés**

## **Capítulo 1: Las Empresas de Seguridad Privada frente a las Teorías de las Relaciones Internacionales.**

La actividad mercenaria data de tiempos inmemoriales, y como actividad comercial, no se le atribuía algún tipo de organización particular como es el caso de las ESP. Pese a ello su desarrollo es claramente mayor. Luego de la Guerra Fría, fue el momento de oro para estas nuevas empresas que generaron un cambio en el orden mundial, con nuevos actores relevantes para la seguridad internacional. “El surgimiento de las ESP como un actor clave de seguridad dentro de los conflictos y en regiones de inestabilidad alrededor del mundo, ha revitalizado el antiguo interés académico por los asuntos del mercenario” (Avant, 2005). Con los cambios intrínsecos que estas empresas generaron, su estudio se volvió necesario para un mejor entendimiento de este fenómeno, y cómo aplicarlos.

Los académicos de seguridad internacional han tratado de comprometerse con explicar las ESP; muchos de estos debaten con respecto a la capacidad y la efectividad de estas empresas para mantener o contribuir a la seguridad internacional. La discusión se dirime entre dos posturas diferentes. Una, la de aquellos teóricos del Realismo como, Leander Anna (Leander, 2005) y Peter Singer (Singer, 2003) que expresan sus dudas con respecto a las capacidades de las ESP como elemento de gobernabilidad mundial. Y dos, la, de aquellos autores con una mirada menos escéptica que la de los realistas, tales como, entre otros, Elke Krahmman (Krahmann, 2003) que sostienen que la teoría de la gobernanza global puede explicar a las ESP como un actor con potencial a aportar a la seguridad internacional (Wood, 2013). De este modo, tal como explica Christopher Wood (2013), realismo y gobernanza global son las dos corrientes teóricas que en este momento reflejan el rango de respuesta a los desarrollos dentro de la seguridad posterior a la Guerra Fría en su conjunto.

El realismo está basado en una interpretación conservadora centrada en el Estado como el principal actor con respecto a la seguridad internacional, y considera que los desarrollos fuera de los paradigmas estructurales de las relaciones interestatales son secundarios. De esta forma los realistas consideran que las ESP constituyen una presencia que viene a romper con ese balance de poder estatal en el ámbito de la seguridad internacional, por lo que los realistas consideran a este nuevo actor del escenario internacional, como un disruptor del balance y orden mundial estatocéntricos (Dunne et al., 2016). Tal mirada se opone a los pensamientos de la Gobernanza Global o también conocida como la teoría de Gobernanza de Seguridad, teoría proveniente de los inicios de la década del 50', que nos va a ayudar a explicar el fenómeno de las ESP en el sector de seguridad.

Llegando al final de la Guerra Fría, la falta de una amenaza militar unificada y una subsecuente expansión del concepto de seguridad de los estados a las corporaciones ha llevado a una creciente divergencia de acuerdos políticos con respecto a la seguridad. Actores privados como las ONG y las empresas de seguridad privada han ganado una influencia significativa durante ese periodo. Dado que estas características no se entienden completamente por los modelos de investigación de seguridad tradicionales, autores como Krahmman (2003), y Hidalgo Capitán, A. L. (2007) sugieren la necesidad de formular una nueva perspectiva teórica si es que se quiere comprender este sistema de seguridad emergente. De tal forma, se crea el concepto de "gobernanza de la seguridad" "Security Governance" en inglés, la cual concibe como un marco de análisis o dispositivo intelectual para estudiar la complejidad de los procesos globales que involucran a múltiples actores que interactúan en diferentes niveles complejos de intereses (Wood, 2013). De esta forma, esta teoría plantea que la proliferación de nuevos actores de seguridad no estatales durante los últimos años de la Guerra Fría en adelante crece a causa de la incapacidad de los actores estatales de

controlar los nuevos problemas de seguridad. Maryori Molina Luna y Vladimir Aguilar Castro (Luna & Castro, 2020), explican como nuevo problema de seguridad a estas cuestiones:

- El principio del derecho a la guerra, concepto con el cual se estrenó el siglo XXI, con guerras como Afganistán (2001), Irak (2003), Somalia (2006). En todos estos casos, la guerra no fue contra un estado rival, sino contra una organización no estatal: fue contra el terrorismo. La de Afganistán fue contra los talibanes; la de Irak se dirigió inicialmente contra las fuerzas de Sadam Hussein, pero luego comprendió también actores no estatales como el estado islámico y otros grupos terroristas; y la de Somalia tuvo por protagonistas a los grupos insurgentes terroristas bajo el estandarte yihadista.
- Los problemas de desarme y control de armas convencionales y no convencionales. Para finales de la guerra fría, el desarme militar fue uno de los principales objetivos de los acuerdos START, donde se supuso una reducción de un 25-30% de las capacidades militares de Estados Unidos y Rusia (Artehistoria, 2017). También, se crearon convenciones con el fin de proteger a la población civil contra el uso indiscriminado de armas convencionales y no convencionales. Un ejemplo de estas regulaciones fue la Convención sobre Ciertas Armas Convencionales, ratificada por 109 países (CICR, 2010). Esto generó un vacío militar que tuvo que ser suplementado con nuevas estrategias y métodos para enfrentar las nuevas amenazas de seguridad.
- La dependencia energética como un modo de subsistencia humana, lo que pone en perspectiva cómo los estados quieren suplir esa demanda energética y qué están dispuestos a hacer para conseguirla.
- La ausencia de una gobernanza global. El siglo XXI heredó esas organizaciones con poca capacidad de actuación frente a grandes hegemonías. Las Naciones Unidas es incapaz de

hacer efectivo un mundo multilateral, poniendo el poder de veto en solo unos pocos miembros.

Las ESP se fundaron para contrarrestar esas nuevas dificultades que la seguridad global enfrentaba (Krahmann, 2003).

Desde la perspectiva del realismo, las ESP son entidades corporativas; la naturaleza de éstas se centra implícitamente en que su accionar va a estar siempre subordinado a los intereses privados de sus dueños. Es cierto que existe la posibilidad de encontrar empresas con objetivos nacionalistas o altruistas, pero ellos siempre van a constituir un objetivo secundario, priorizando el rédito económico de estos negocios por sobre los primeros (Wood, 2013). Los CEO se presentan como un nuevo actor dentro de la seguridad internacional, no suponen un cambio de régimen, sino una inclusión a un orden mundial enfocado principalmente en la relación estatal.

Por otra parte, es de estimar que las ESP podrían aprovecharse completamente de la incapacidad de un Estado para defenderse, maximizando así su influencia política, y, por lo tanto, conseguir un trato que sea más beneficioso para la entidad privada. Los casos de sobrecontratación analizados fortalecen los argumentos de los Realistas con relación a que las ESP son empresas que intentan socavar la autoridad Estatal, generando así dependencia (Wood, 2013). A menudo se ha insinuado entre los académicos de la seguridad, que existe la posibilidad de que las ESP socave deliberadamente los intereses de seguridad del cliente, prolongando las hostilidades para maximizar su influencia en obligar al cliente a seguir requiriendo de los servicios que se proveen (Wood, 2013). También, la integración de estas empresas en los ámbitos militares, generan una dependencia muy grande por parte del ejército hacia las ESP, implicando en algunos casos, que a

países como los Estados Unidos y Gran Bretaña, les sea imposible afrontar una guerra sin la presencia de las ESP (Taylor, 2011; Wood, 2013).

Críticos a las ESP como Peter Singer (Singer, 2003), establecen que la existencia de las ESP en el escenario internacional, como método de proyección de poder con respecto a otros países, tiene la capacidad de desestabilizar la seguridad centrada en el control estatal (Singer, 2003; 2007). Desde la perspectiva del Realismo, la principal amenaza que plantean estas ESP, surge de la formación de una dependencia estructural sobre la provisión de seguridad por parte de actores privados en un escenario estatal. Esto no implica que no sean eficientes ni imposibles de integrar al escenario internacional (Wood, 2013; Dunne et al., 2016). Contratar los servicios de una ESP es básicamente trabajar con las capacidades monetarias y financieras de un país, por lo que manifiestan su poder económico mediante la contratación de estas empresas, que luego van a proyectar un poder militar a nombre del Estado que las contrató. Decir que solo tienen capacidades militares sería erróneo; también funcionan como medio de algún servicio de apoyo, sea en comunicaciones o de organización. También pueden conformar misiones de ayuda humanitaria, como refugiados, desastres climáticos, etc (Wood, 2013).

Si bien la teoría de la gobernanza global identifica, tal como lo hace el realismo, una creciente dependencia estructural de los estados hacia las Empresas de Seguridad Privada en cuestiones de seguridad, los académicos partidarios del enfoque teórico de la gobernanza destacan que la integración de las ESP en las estructuras del estado, sobre todo la militar, es un suceso deseable e inevitable para suplir la ineficiencia del estado para tratar con nuevos problemas de seguridad nacional como internacional (Wood, 2013). Las ESP se presentan como una entidad que contribuye de manera usualmente positiva a las estructuras de seguridad existentes. Para los teóricos de la gobernabilidad, la integración generalizada del ESP dentro del aparato militar de los actores



estatales surge en primera instancia como resultado de una búsqueda lógica de la economía y la eficacia que hace eco en algunos aspectos del argumento realista a favor de las ESP. Para muchos estados, la escasez de recursos se presenta como el principal impulsor del incentivo económico para emplear fuerzas de ESP. De esta forma, los actores de las ESP pueden verse como una alternativa rentable a los gastos de las fuerzas convencionales que refleja las actitudes públicas a favor de la reducción del gasto militar (Wood, 2013).

De modo que, con el propósito de lograr mayor claridad respecto a las dos grandes perspectivas, se podrían enumerar los siguientes conceptos centrales para tener un mejor entendimiento de las posiciones de estas teorías con respecto a la peligrosidad, las motivaciones y la confiabilidad de las ESP. Tal como los académicos postulan existen dificultades imperiosas para conciliar los diferentes enfoques Realistas y de la Gobernanza Global, siendo las ESP un caso paradigmático. El Realismo provee una postura más en torno a la crítica de las ESP, percibiéndolas como un actor que compite con el poder estatal y atenta contra este último, mientras que la Gobernanza Global ofrece un argumento más atractivo al sugerir que las ESP son capaces de contribuir a las estructuras de seguridad ya fundadas, como también permitir la proliferación positiva de actores de seguridad no estatales (Wood, 2013). El realismo considera a las ESP como un nuevo actor dentro del escenario internacional que viene a atentar contra el balance de poder dentro del orden mundial, siendo una amenaza para la seguridad. Por contraposición al enfoque teórico, el de la gobernanza global ve a las ESP como un nuevo actor que se muestra como una solución a los problemas estatales, y deberían ser integradas en el escenario internacional, siempre y cuando sean reguladas.

Uno de los puntos en común de las dos teorías presentadas, el principal, se enfoca en que las ESP pueden contribuir y al mismo tiempo socavar las estructuras de la seguridad internacional. Otro de los puntos que tienen en común estas teorías con respecto a las ESP tiene que ver con las

preocupaciones relacionadas con la motivación y la confiabilidad de las ESP (Wood, 2013). En vistas a las teorías mencionadas, sugerimos el análisis de lo ocurrido en Irak que ofrece un escenario óptimo para tal abordaje.



Universidad de  
**San Andrés**

## Capítulo 2: Antecedentes a la Guerra de Irak

Entidades civiles proveyeron servicios militares para los Estados Unidos desde su conformación como estado hasta los inicios de la Segunda Guerra Mundial; estos servicios se enfocaron principalmente en el área de logística y de compra y venta de armas. Como puede apreciarse en la tabla 1, el uso de civiles por parte de Estados Unidos data de la revolución americana, y en guerras como la mexicana-americana, la guerra civil, primera y segunda guerra mundial, y los conflictos en Corea y en Vietnam (Avant 2006).

*Table 1. Estimated Civilian Participation in U.S. Conflicts<sup>2</sup>*

<b>War/Conflict</b>	<b>Civilians</b>	<b>Military</b>	<b>Ratio</b>
Revolution	1,500	9,000	1:6
Mexican/American	6,000	33,000	1:6
Civil War	200,000	1,000,000	1:5
World War I	85,000	2,000,000	1:20
World War II	734,000	5,400,000	1:7
Korean Conflict	156,000	393,000	1:2.5
Vietnam Conflict	70,000	359,000	1:5

Fuente: (Avant, 2006)

En algunos casos, se requería trabajos más específicos; por ejemplo, durante la segunda guerra mundial, el ejército americano necesitaba entrenar pilotos, para abastecer el déficit existente de ellos, optó por contratar pilotos de aerolíneas, para poder entrenar a sus fuerzas aéreas. Luego de Vietnam, estos trabajos empezaron a especializarse aún más; se hizo evidente la presencia de un civil más experto en el área, lo cual aceleró el uso de contratistas. Por lo que queda más clara la distinción entre civiles y contratistas: los primeros desarrollan su profesión específica en su área de formación, mientras que los segundos, contando con la misma formación, se preparan para

desempeñarse en escenarios conflictivos. Por lo que, empieza a verse un corrimiento desde el área civil al de los contratistas para participar más activamente en los conflictos. Es el caso de los conflictos siguientes a la guerra fría, como; Somalia, Haití, Zaire, Bosnia o Kosovo, tuvieron una gran presencia de ESP en su desarrollo, tal como lo evidencia la siguiente tabla (Singer, 2002; Jarle Hansen, 2012).

*Table 2. Estimated Numbers of Contractors deployed to Theaters during Conflict<sup>8</sup>*

<b>Conflict</b>	<b>Contractors</b>	<b>Military</b>	<b>Ratio</b>
Gulf War I	9,200	541,000	1:58
Bosnia	1,400	20,000	1:15
Iraq	21,000	140,000	1:6

Fuente: (Avant, 2006)

Se puede apreciar en la documentación existente (Avant, 2006) que el uso de contratistas desde la Guerra del Golfo experimentó un crecimiento rotundo mediante el cual, se empezaron a utilizar más contratistas privados, para atender a las necesidades de los ejércitos americanos. La proporción de militares con respecto a los contratistas se fue achicando a lo largo de los años, siendo Irak, el conflicto armado con mayor presencia de contratistas estadounidenses.

Lo que se pretende destacar en este aspecto es que los individuos, estados y organizaciones internacionales, empezaron a prescindir de servicios militares provistos, no por un estado o una institución, sino por el mercado privado (Singer, 2002; Avant, 2006). Varios factores aceleraron el uso de contratistas en las cuestiones militares. El primer antecedente data de 1954, el cual fue el primer contrato de los Estados Unidos con el sector privado, constituyendo la Circular OMB No. A-76. Esta establece “las políticas y procedimientos que las agencias de la rama ejecutiva deben usar para identificar actividades de tipo comercial y determinar si estas actividades son mejor

provistas por el sector privado, por empleados gubernamentales o por otra agencia a través de una tarifa por pago. -acuerdo de servicio.” (Circular NO. A-76). Esto marca un precedente, de la inclusión del sector privado, en las decisiones estatales. Años más tarde, hacia el final de la Guerra Fría, la creación de nuevas y más sofisticadas armas hizo que el personal militar dependiera en mayor medida, de contratistas para el soporte técnico de esta nueva generación de armamento; algo que los grupos militares no estaban capacitados para hacer. Un buen ejemplo de esto fue la utilización de misiles guiados de largo alcance. Durante la guerra de Irak, las ESP proveían soporte operacional para los bombarderos B-2, los aviones de combate F-117, Drones de reconocimiento, la aeronave de reconocimiento U-2, los tanques M-1, los helicópteros Apache y varios navíos (Avant, 2006).

El fin de la Guerra Fría y, la victoria de los pensamientos capitalistas y la libertad empresarial que existía en Estados Unidos fueron factores que, sumados, contribuyeron a que el número de empresas escalara, junto con el impacto de la Circular OMB No. A-76, que incentivó a nuevas empresas de seguridad a internarse en este mercado, ya que había mayor interés militar en este nuevo mar de oportunidades. Deborah Avant (Avant, 2006) también encuentra un incentivo adicional para el crecimiento de las empresas de seguridad privada. Como mencionamos anteriormente, el fin de la Guerra Fría, deja a un tercio de la población militar desafectada, generando una creciente oferta del personal militar para estas empresas en crecimiento. Tal desafectación de las capacidades militares de los países, y el crecimiento de nuevos conflictos y emergencias de menor escala, demandaba que las tropas fueran desplegadas de manera más rápida y efectiva. Esto generó una gran sobrecarga en las capacidades militares, de tal manera, que los gobiernos utilizaban las ESP para reemplazar ese vacío. Esto resultó ser un hecho oportuno para

que los contratistas ofrecieran una solución para las nuevas dificultades que enfrentan los militares (Avant, 2006).

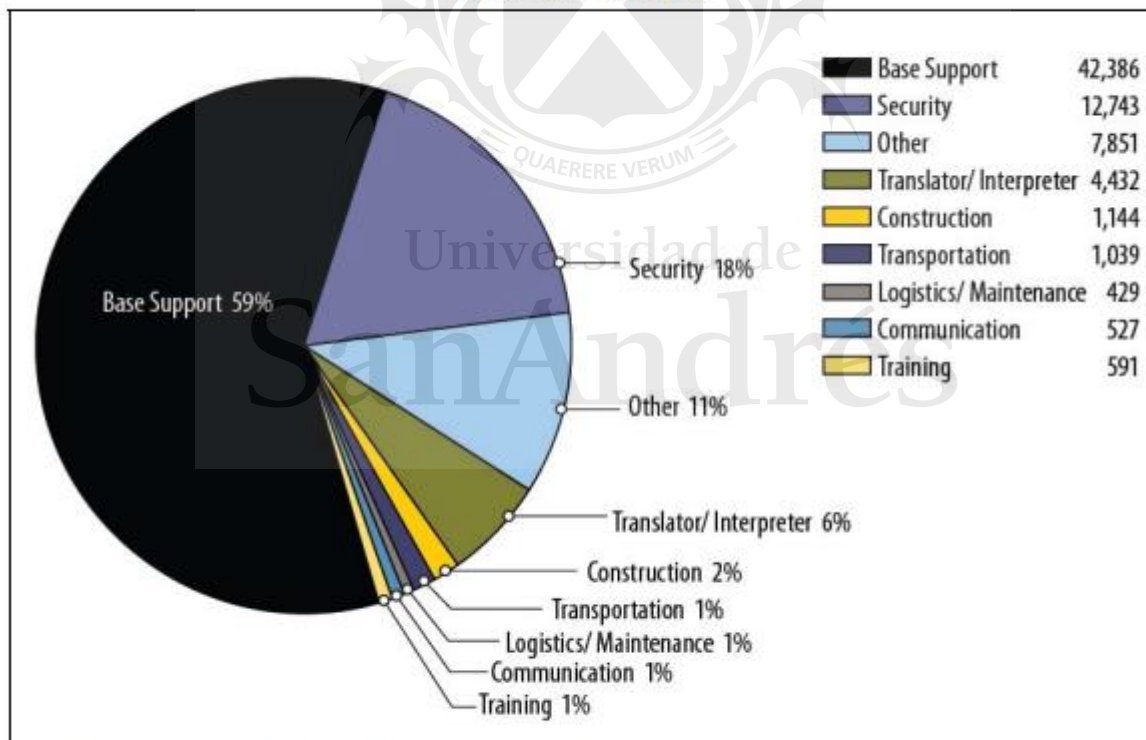
El 11 de septiembre de 2001, el mundo se ve sumergido en uno de los eventos más preponderantes del siglo XXI, un ataque terrorista. La guerra hacia el terrorismo es un término que se refiere a la campaña militar lanzada por el gobierno de los Estados Unidos (Butt, 2019). El objetivo principal de esta campaña, fueron aquellos grupos extremistas localizados en todo el mundo musulmán, donde los grupos más prominentes fueron, Al-Qaeda, el Estado Islámico y otros varios grupos terroristas. El 14 de septiembre de 2001, se firmó la ley de Autorización para el uso de Fuerza Militar contra el Terrorismo, la cual autorizaba el uso de Tropas americanas contra aquellos responsables de los ataques del 11 de septiembre (H.J.Res. 114 (107th): Authorization for Use of Military Force Against ... -- Senate Vote #237 -- Oct 11, 2002, 2002).

Peter Singer (Singer, 2003), establece tres tipos de ESP; por un lado, los servicios de seguridad y de fuerzas armadas, por otro, entrenamiento y consultoría, y por último, servicios de apoyo.

- *Servicios de seguridad y de fuerzas armadas:* éstas son firmas que proveen fuerzas militares capaces de combatir en el campo, y constituyen la minoría de las ESP.
- *Servicios de entrenamiento y consultoría:* éstas proveen entrenamiento y servicios de recomendaciones; también, dentro de este contexto, ofrecen en muchos casos, los servicios de seguridad personal y de guardaespaldas.
- *Servicios de apoyo:* proveen apoyo logístico y asistencia, tales como el mantenimiento del armamento, apoyo técnico, el tratamiento de explosivos, y recolección de datos y análisis (Singer, 2003; Isenberg, 2009).

Los servicios que más se buscaban para la campaña en Irak fueron, de apoyo a las bases, de seguridad, y de traducción. Tal como muestra el siguiente grafico de torta (Figura 8), hubo una gama de servicios que se ejecutaron en Irak con sus respectivos porcentajes de toda la fuerza contratista. Si debemos localizar cada uno de los servicios mostrados en el gráfico, podemos decir que; los servicios de seguridad y de fuerzas armadas, constituyen el rubro de seguridad y transporte; servicios de entrenamiento y de consultoría, constituyen a, entrenamiento, soporte de base; servicios de apoyo, constituyen al rubro de traducción, construcción, comunicación, logística y mantenimiento.

**Figure 8. Contractor Personnel in Iraq by Type of Service Provided**  
(As of December 2010)



**Source:** DOD US CENTCOM 1<sup>st</sup> Quarter Contractor Census Report.

**Notes:** Numbers may vary slightly from data in other sections of the report due to differences in the points in time when data was gathered. The Department of Defense did not separately track Logistics/Maintenance or Training until the first quarter of 2010.

Fuente: (Statista, 2015)

Los contratistas de seguridad, o ESP específicos, pueden proveer un importante aporte beneficioso para las campañas de Estados Unidos en Medio Oriente, sobre todo para la lucha contra el terrorismo (Spearin, 2001; Schreier & Caparini, 2005; Richemond, 2007). Como vimos anteriormente, una de las principales cualidades de las ESP tiene que ver con la velocidad de despliegue, la que es mucho mayor a la de los ejércitos convencionales. Esta cualidad hace que sean más eficientes a la hora de tratar con nuevos escenarios prescindiendo de la necesidad de adaptar sus propias tropas para estos particulares escenarios, de modo tal que no habría que modificar todo el sistema militar o adaptarlo. El Departamento de Estado de Estados Unidos consideraba que el tiempo de entrenamiento de sus hombres no era lo suficientemente rápido, y la burocracia para el despliegue de nuevas tropas también representaba un impedimento para controlar las zonas en conflicto. Más aún, la contratación de ESP permitió que los Estados Unidos evitaran un conflicto con la población americana al no tener desplegado un gran ejército en la zona. A pesar de que la participación por parte de los Estados Unidos en Irak tenía mucha aceptación pública entre su población durante los primeros años de la campaña (Gershkoff & Kushner, 2005; Kennedy et al., 2008; Schneider, 2012), los altos mandos querían prevenir un movimiento antiguerra que apaciguara los esfuerzos en Medio Oriente. Es sabido que los principales movimientos antiguerra, se oponen al exceso de despliegue de fuerzas en los campos de batalla (Howlett, 2003).

Otra razón por la que fue necesaria la contratación de ESP para participar en la guerra de Irak, fue el agregado militar que el ejército recibía. Estados Unidos desplegó una fuerza total de 140,000 soldados, a esto se le sumó 21,000 contratistas americanos y otros 74,000 contratistas, extranjeros e iraquíes (Avant, 2006; Isenberg, 2009; Taylor, 2011; Fitzsimmons, 2015), esto permitió que las fuerzas militares respondieron directamente al Departamento de Defensa, centrándose en los



enfrentamientos armados, mientras que los contratistas se ocupaban de las tareas que anteriormente estaban asignadas al personal militar, tales como, la mensajería, el entrenamiento del ejército nacional iraquí, trata de desechos, etc. (Avant, 2006; Dogru, 2010). En algunos casos, los contratistas de seguridad ofrecían personal especializado que resultaba muy útil para las fuerzas militares. Las empresas reclutan su personal desde una búsqueda de CV, conforme a capacidades específicas. De manera tal que, si fuera necesario un rol particular con el que el ejército no contaba, entonces las empresas buscaban cubrir ese déficit particular reemplazando e integrando a su equipo a ese personal especializado. Es el caso de algunas agencias del gobierno americano, que contratan lugareños para proveer asistencia con respecto al terreno, la cultura y el lenguaje (Avant, 2006). Asimismo, Blackwater y Triple Canopy, dos de las más influyentes ESP (Hammer, 2007; Palmer, 2018), crearon sus destacamentos para ir a Irak, todo con una base de datos que se ajustara a las necesidades del ejército americano; en este caso, se buscó a personal para destacamentos de seguridad. Más aún, empresas como Titan, tenían un contrato específico para manejar las prisiones iraquíes, por lo que reclutaron traductores para ellas. Para el ejército, le es difícil encontrar soldados que cumplan estos roles específicos, y más aún, entrenarlos a tal propósito, por lo que las ESP vinieron a cubrir un déficit que permitió una mejor performance militar (Isenberg, 2009).

Zarco destaca un último factor que llevó al gobierno a decidir el contrato de las ESP para participar en Irak: el ahorro monetario. Los contratistas pueden ser contratados para circunstancias específicas, de tal manera que cuando cumple con su objetivo, donde ya no son más necesarios, estos se retiran de la zona de conflicto (Zarco, 2012). De esta forma, el despliegue de nuevas capacidades militares representa un menor costo político, se reduce la cantidad de soldados americanos en el conflicto y a largo plazo, los costos de pagar salarios a pagar los contratos son muy diferentes (Zarco, 2012). De acuerdo con oficiales del gobierno, el Departamento de Estado

y el Departamento de Defensa, sin la participación de las ESP, no hubieran sido capaces de ejecutar sus misiones en Irak (Schwartz, 2011; Taylor, 2011).



Universidad de  
**San Andrés**

### **Capítulo 3: Algunas de las empresas de seguridad privada que participaron en Irak.**

#### *1. Servicios de seguridad y de fuerzas armadas*

*Blackwater era una compañía militar privada estadounidense fundada el 26 de diciembre de 1996 por el ex oficial de los SEAL de la Armada, Erik Prince. La compañía recibió una notoriedad generalizada en 2007, cuando un grupo de sus empleados mató a 17 civiles iraquíes e hirió a 20 en la plaza Nisour, Bagdad, por lo que cuatro guardias fueron condenados en Estados Unidos (Risen, 2007). Para luego ser indultados el 22 de diciembre de 2020 por el presidente Donald Trump. Proporcionaron servicios de seguridad al gobierno federal de los Estados Unidos sobre una base contractual. Desde 2003, el grupo ha prestado servicios a la Agencia Central de Inteligencia, y el Departamento de Estados de los Estados Unidos (Singer, 2003).*

Para 2004, Blackwater había recibido un contrato de protección a oficiales extranjeros y estadounidenses cuando les fuera necesario. Para esto, la empresa tuvo que contratar aproximadamente 480 efectivos para cumplir esos roles, todo por un costo cercano a los \$332 millones de dólares. Este programa se llamó, Worldwide Personal Protective Service (WPPS), donde en 2006 este contrato se renovó, aumentando el número de empleados y con una ganancia de \$343 millones de dólares. También se le encomendó la protección de la Embajada Estadounidense en Bagdad y sus funcionarios (Palmer, 2018).

Esta empresa recibió contratos millonarios por medio del Departamento de Estado, para 2006 había recibido \$1000 millones de dólares. Con respecto al método que se utilizó para licitar estos contratos, Blackwater recibió todos sus contratos directamente del Departamento de Estado, diferente a como era la licitación de ESP, en este caso hubo un claro ejemplo de prioridad hacia la empresa (Singer, 2007; Palmer, 2018). También, el gobierno de los Estados Unidos protegió en

varios casos a los empleados de Blackwater los cuales se habían involucrado en controversias que veremos más adelante.

*Triple Canopy* es una empresa estadounidense de seguridad privada que brinda seguridad integrada, apoyo a la misión y servicios de gestión de riesgos a clientes corporativos, gubernamentales y ONGs (Hammer, 2007). Triple Canopy es conocido principalmente por brindar seguridad en Irak, particularmente por proteger la sede de la Autoridad Provisional de la Coalición en todo el país (Hammer, 2007). En abril de 2009, los contratos en Irak manejados por Blackwater USA, entonces bajo investigación por incumplimiento de las reglas y violencia, fueron asignados por el Departamento de Estado a Triple Canopy. Anteriormente, Triple Canopy había sido responsable de los contratos fuera de Bagdad, mientras que los nuevos contratos que asumió la empresa estaban centrados principalmente en Bagdad (Risen, 2007).

*Armor Group International* es una empresa británica que proporciona seguridad privada. Armor Group ofrece servicios de protección de seguridad, consultoría en gestión de riesgos, capacitación en seguridad y servicios de acción contra minas (Washington Post, 2007). Armor Group entró por primera vez en Irak bajo contrato con Bechtel Corporation en mayo de 2003. En 2007, la empresa tenía 1.200 empleados en Iraq (Washington Post, 2007). Armor Group proporcionaba seguridad a aproximadamente un tercio de todos los convoyes de suministros no militares en Irak. Contratada por el Departamento de Defensa, Armor Group fue una de las principales empresas que estaba autorizada y licenciada legalmente para operar en Iraq por el ministro del Interior (Washington Post, 2007). El caso más emblemático de esta empresa fue cuando en 2011, un miembro de Armor Group fue condenado a 20 años de prisión por matar a dos colegas suyos y por el intento de asesinato de un hombre iraquí. El dictamen fue sentenciado por la corte iraquí, y fue el primer contratista militar juzgado por las leyes de Iraq, luego de que se

derogara la Orden 17 que establece inmunidad de los contratistas a las leyes iraquíes, un concepto que se va a retomar más adelante (BBC, 2011).

## 2. *Servicios de entrenamiento y consultoría*

*Aegis Defense Services* es una empresa británica de seguridad privada y militar. Hoy en día es signatario fundador del Código Internacional de Conducta para Proveedores de Seguridad Privada, el cual tiene como objetivo aclarar los estándares internacionales para la industria de la seguridad privada, para mejorar la supervisión y la rendición de cuentas de estas empresas. Esto se debió a la complejidad en la que estas empresas operaban. (Arenal Lora & Dominguez Diaz, 2020; Klein & Fainaru, 2007).

En Irak, Aegis tuvo un contrato de \$293 millones durante tres años con el Departamento de Defensa de los Estados Unidos para brindar servicios de apoyo de seguridad a la Oficina de Proyectos y Contrataciones (PCO), responsable de administrar el programa de reconstrucción (Klein & Fainaru, 2007).

En mayo de 2011, se anunció que el ejército estadounidense se retiraría de Bagdad, y sería reemplazado por ocho compañías, incluidas Aegis y DynCorp International, para hacerse cargo de las operaciones de seguridad (Bowman & Chatterjee, 2011).

*Vinnell Corporation* es una empresa militar privada internacional con sede en Herndon, Virginia, Estados Unidos, que se especializa en entrenamiento militar, logística y apoyo en forma de consultoría de gestión y mantenimiento de sistemas de armas (Isenberg, 2009). Vinnell Corporation recibió el contrato inicial para recrear el Nuevo Ejército Iraquí en 2003 por parte del Departamento de Defensa de Estados Unidos. El contrato era por nueve batallones, con la opción

de extender el entrenamiento a 27 batallones. Durante el conflicto, la segunda fase fue asumida por las fuerzas militares regulares de EE. UU ya que la empresa no tenía las capacidades para llevar esos proyectos a cabo (Isenberg, 2009).

*DynCorp International*, era una empresa militar privada estadounidense la cual comenzó como una compañía de aviación, brindó apoyo a las operaciones de vuelo, capacitación y tutoría, desarrollo internacional, capacitación y apoyo de inteligencia, operaciones de contingencia, seguridad y operaciones y mantenimiento de vehículos terrestres (Schwartz, 2011). DynCorp recibió más del 96% de sus más de \$3 mil millones en ingresos anuales del gobierno federal de los EE. UU (Schwartz, 2011).

*L3 Military Professional Resources Inc* era un proveedor global de servicios de contratistas militares privados. Ofrecía una amplia gama de servicios profesionales tanto a clientes públicos como privados, entre ellos se destaca el Departamento de Defensa de EE. UU., el Departamento de Estado de EE. UU., el Departamento de Justicia de EE. UU., el Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU. (Isenberg, 2009). Según un censo del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, la empresa tuvo al menos 500 empleados que trabajaron en Irak con 12 contratos diferentes, incluida la tutoría a trabajadores civiles en el Ministerio de Defensa (Merle, 2006).

### 3. *Servicios de apoyo*

*Custer Battles, LLC* era un contratista de defensa. En un momento, la compañía ofreció servicios que incluían servicios de seguridad, soporte en litigios, consultoría de riesgo global, capacitación e inteligencia comercial (Isenberg, 2009).

En mayo de 2003, Custer Battles estableció su presencia en Bagdad, Irak. En junio de 2003, Custer Battles obtuvo un contrato competitivo para asegurar el Aeropuerto Internacional de Bagdad (BIAP). El contrato de 12 meses con la Autoridad Provisional de la Coalición valía \$16.8 millones (Martin, 2004).

La compañía continuó expandiendo sus operaciones en Irak durante 2003 y 2004. Sus clientes incluyeron la Autoridad Provisional de la Coalición, Bearing Point, Washington Group International, Parsons Corporation, Halliburton y el Ejército de los Estados Unidos (Martin, 2004). En octubre de 2004, la empresa fue demandada en virtud de la Ley de Reclamaciones Falsas. Como se trataba de la primera demanda contra contratistas en Irak, la empresa recibió una atención significativa en los medios de comunicación (Isenberg, 2009). Según la filtración de documentos de la guerra de Irak, un convoy de Custer Battles inició un tiroteo en Umm Qasr en 2004, disparó la llanta de un automóvil civil que se acercaba y disparó cinco tiros contra un minibús civil abarrotado. El tiroteo se detuvo solo después de que la policía iraquí, la seguridad del puerto y una unidad militar británica finalmente alcanzaran al convoy. Los empleados de Custer Battles entregaron dinero en efectivo para evitar una acción disciplinaria (Myers, 2005).

A principios de 2004, el Departamento de Defensa de los Estados Unidos inició una investigación sobre uno de los contratos de Custer Battles con la Coalition Provisional Authority, lo que provocó que la empresa fuera suspendida de futuros contratos. A principios de 2005, Custer Battles cesó sus operaciones en Irak (Myers, 2005).

*Kellogg Brown & Root (KBR)* es una empresa con sede en EE. UU. que opera en los campos de la ciencia, la tecnología y la ingeniería. KBR trabaja en varios mercados, incluidos el aeroespacial, de defensa, industrial y de inteligencia. Esta empresa ha generado muchos contratos

con el Departamento de Estado de los EE. UU.; durante la Segunda Guerra Mundial, la Guerra de Vietnam y la Guerra de Irak (Bloomberg, 2021).

En la década de 2000, KBR empleó a más contratistas privados estadounidenses y tuvo el contrato más grande con el gobierno de Estados Unidos en Irak. KBR tenía desplegado más de 14.000 contratistas americanos en Irak brindando apoyo logístico al ejército estadounidense y sus aliados (Isenberg, 2009). En noviembre de 2012, la empresa de seguridad privada KBR fue acusada de negligencia al exponer a soldados de la Guardia Nacional a químicos tóxicos en una planta de agua en Irak. La demanda fue presentada por una docena de soldados de la Guardia Nacional, quienes acusaron a la empresa de exponerlos al carcinógeno cromo hexavalente mientras brindaban seguridad a los trabajadores civiles en la instalación de agua de Qarmat Ali en 2003. El jurado encontró a KBR culpable, teniendo que pagar una indemnización de \$85 millones. Cada soldado recibió \$850,000 en daños no económicos y \$6.25 millones en daños punitivos (CNN, 2012). En enero de 2019, un caso presentado contra KBR por cientos de veteranos, que afirmaron que la práctica de la empresa de quemar basura cerca de los cuarteles los había enfermado, fue rechazado por la corte suprema, que dejó en pie el fallo de un tribunal inferior contra los veteranos (Lawrence, 2019).

*Titan Corporation* era una empresa con sede en Estados Unidos que comenzó como contratista de defensa de telecomunicaciones con su sede ubicada en San Diego, California. Titan fue contratado por el ejército estadounidense en 2003 para proporcionar servicios de traducción con más de 4,400 traductores y recibió 112,1 millones de dólares por este contrato (Center for Public Integrity, 2004). El 12 de enero de 2005, Titan recibió un contrato competitivo con un valor potencial de \$163,9 millones del Comando de Defensa Espacial y de Misiles del Ejército de EE.



UU. para el asesoramiento de cuestiones de planificación, y análisis de información de diversas fuentes para el manejo de las operaciones (Center for Public Integrity, 2004).

*Analysis California Incorporated Center* (CACI) es una empresa multinacional estadounidense de servicios de la información radicada en Virginia, Estados Unidos. CACI proporciona servicios a muchas ramas del gobierno de los Estados Unidos, incluido el Departamento de Defensa, Seguridad Nacional, inteligencia y atención médica (Isenberg, 2009) El 9 de junio de 2004, un grupo de iraquíes demandó a CACI International y Titan Corporation en frente a un tribunal federal de los EE. UU. con respecto a la participación de CACI en el escándalo de abusos en la prisión de Abu Ghraib (Isenberg, 2009), un caso que va a ser explicado más adelante.



Universidad de  
**San Andrés**

#### **Capítulo 4: Abusos en Derechos Humanos de las ESP.**

Utilizando la base de Datos de *Private Security Company Violent Incident Dataset* (PSCVID), creada en 2012 por Scott Fitzsimmons (Fitzsimmons, 2017), la cual contiene datos sobre cientos de incidentes violentos que involucran al personal de seguridad privada en Irak, dos empresas destacaron tener la mayor incidencia en actos violentos, Blackwater y Dyncorp.

*Table I.1* Casualties inflicted by Blackwater and DynCorp, 2003–2009

	<i>Blackwater</i>	<i>DynCorp</i>
Violent incidents	428	78
Incidents in which firms used violence	353	60
Incidents in which firms fired weapons	342	59
Non-insurgent deaths	38	3
Insurgent deaths	33*	8
Total deaths	71*	11
Serious non-insurgent injuries	64*	1
Serious insurgent injuries	58*	4
Total serious injuries	122*	5

Fuente: (Fitzsimmons, 2017)

En esta tabla podemos ver una clara diferencia entre la cantidad de incidentes violentos de ambas empresas. Esto tiene varias interpretaciones, si bien forman parte de dos grupos diferentes de cómo Singer (Singer, 2003) establece la división, ambas empresas participaron en enfrentamientos armados. Esto quiere decir que, si bien existe una división para estas empresas, la participación en incidentes violentos no depende de esta división, básicamente, cualquier empresa puede incurrir en incidentes violentos sin la necesidad de participar de un rubro específico. Si bien estos datos conllevan información oficial, el autor estipula que existieron más casos de violencia, solo que no fueron reportados o adjudicados (Fitzsimmons, 2015). Cuando evaluamos los hechos, parece que el uso de ESP ha perjudicado más que ayudado a los esfuerzos de contrainsurgencia de las misiones estadounidenses en Irak. Peor aún, el gobierno ya no puede llevar a cabo una de sus principales

tareas: luchar y ganar las guerras de la nación con personal militar. En cambio, la contratación a gran escala de operaciones militares ha llevado a depender de empresas privadas como Blackwater o Dyn Corp, las cuales han generado graves vulnerabilidades (Risen, 2007; Tkach, 2019).

De esta forma, podemos hacer un análisis de los principales incidentes que enfrentaron estas ESP, ya que son las dos empresas más relevantes para armar una conclusión con respecto al mal accionar de las empresas.

Como mencioné anteriormente, los empleados de las empresas militares CACI y Titan Corp estuvieron implicados en los escándalos de la prisión de Abu Ghraib en 2003 y 2004 (CNN Editorial Research, 2013). Abu Ghraib es una ciudad en Irak, ubicada a 20 kilómetros de Bagdad en el oeste de la provincia de Anbar. Detrás está la prisión de Abu Ghraib, conocida en la cúpula militar como un lugar de tortura, primero por las fuerzas de Saddam Hussein y luego por las fuerzas estadounidenses (CNN Editorial Research, 2013). La Policía Militar de EE. UU. encontró que el 36% de los casos de Abu Ghraib tenían relación con contratistas (Singer, 2007). Joseph Darby fue el primero en denunciar este crimen de lesa humanidad. Darby era miembro de la policía militar en prisión en ese momento y fue testigo de la tortura mientras estaba posicionado ahí. En 2004, entregó al Comando de Investigación Criminal de los Estados Unidos un disco duro que contenía fotografías que demostraban lo sucedido. En abril de 2004, la revista de televisión estadounidense 60 Minutes publicó un artículo del *The New Yorker* que relataba la tortura y humillación de iraquíes capturados por soldados y civiles estadounidenses. La historia incluía fotografías que mostraban los malos tratos a los presos. Estos eventos crearon un gran escándalo político en los Estados Unidos y otros países confederados. Miembros de la policía militar identificaron a los perpetradores de estos actos, seis de los cuales eran contratistas de seguridad (Singer, 2007). De todos modos, aunque los soldados del ejército de EE. UU. implicados en los abusos de Abu Ghraib

han comparecido debidamente ante los tribunales por sus crímenes, tres años después, ni un solo contratista privado mencionado en el informe de investigación del ejército de EE. UU. ha sido acusado, procesado o castigado (Singer, 2007). Debido a estos sucesos, en 2009, el Congreso presentó la Ley de Autorización de Defensa que establece que el interrogatorio en tiempo de guerra es una función inherentemente gubernamental, ya que “implica que el ejercicio de una discreción sustancial en la aplicación de la autoridad del gobierno y es probable que tenga un impacto significativo en la vida y la libertad de las personas cuestionadas (Palmer, 2018)”.

El 16 de febrero de 2005, cuatro guardias de Blackwater que escoltaban un convoy del Departamento de Estado en Irak dispararon 70 rondas contra un vehículo iraquí. Las fuerzas de seguridad dijeron que se sintieron amenazadas cuando el conductor ignoró las órdenes de detenerse mientras se acercaba al convoy (Kelly, 2005; Fainaru & al-Izzi, 2007). Aún se desconoce el estado del conductor del automóvil, ya que el convoy no se detuvo después del tiroteo. Una investigación realizada por el Servicio de Seguridad Diplomática del Departamento de Estado concluyó que el tiroteo fue infundado y que los empleados de Blackwater habían hecho declaraciones falsas a los investigadores. Se alegó que uno de los coches de Blackwater fue alcanzado por hombres armados, pero la investigación concluyó que uno de los guardias de Blackwater había disparado accidentalmente contra su propio coche. El memorando final de los investigadores en junio de 2005 declaró que los guardias "no justificaron sus acciones" e "hicieron declaraciones falsas", que incluían acusaciones de que las balas en Blackwater habían sido disparadas por un pasajero iraquí. Los investigadores concluyeron que la evidencia indicaba que un guardia había disparado accidentalmente contra su automóvil (Kelly, 2005). John Freeze, el jefe de seguridad de la embajada de Estados Unidos en Irak se negó a castigar a los guardaespaldas de Blackwater porque

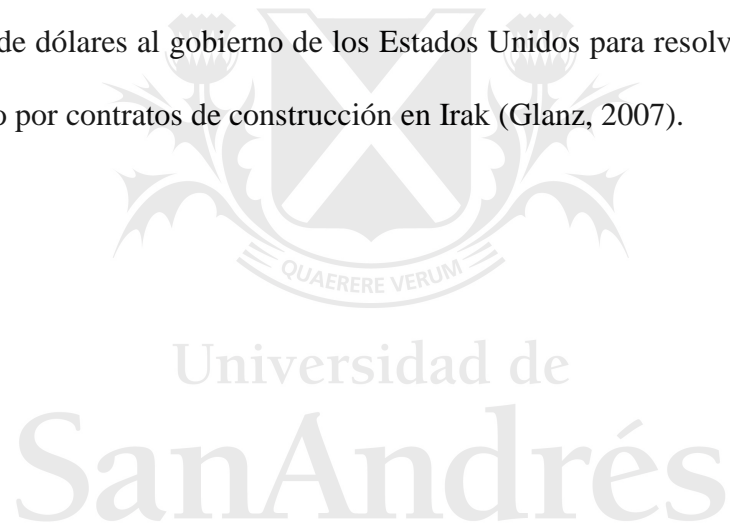
creía que cualquier acción disciplinaria bajaría la moral de los contratistas de Blackwater (Kelly, 2005).

El gobierno iraquí revocó la licencia de Blackwater para operar en Irak el 17 de septiembre de 2007, luego de una masacre en la plaza Nisour de Bagdad, en la que los contratistas de Blackwater fueron condenados por matar a 17 civiles iraquíes (BBC, 2007). Las muertes ocurrieron cuando un equipo de Seguridad Especial de Blackwater escoltó un convoy del Departamento de Estado de Estados Unidos en su camino a una reunión al oeste de Bagdad. Los empleados de la empresa afirman que fueron atacados por hombres armados y respondieron de acuerdo con las reglas de enfrentamiento, luchando por salir de la plaza luego de que uno de sus vehículos se inhabilitó. Por otro lado, la policía iraquí y testigos informaron que los contratistas abrieron fuego primero, disparando contra una camioneta que conducía pareja con su hijo que no pudo retroceder a tiempo del convoy, debido a que no pudo separarse del tráfico (Singer, 2007). El gobierno de Estados Unidos restableció el permiso en abril de 2008, pero a principios de 2009 los iraquíes anunciaron que se habían negado a renovar el permiso. A la compañía se le permitió continuar la lucha contra el territorio iraquí hasta enero de 2009, cuando entró en vigor el Acuerdo sobre el Estatuto de las Fuerzas entre Estados Unidos e Irak. En 2014, cuatro empleados de Blackwater fueron juzgados y declarados culpables por el Tribunal Federal de los Estados Unidos en relación con los eventos de 2007 (Apuzzo, 2014).

Según *The New York Times*, el Inspector General Especial para la Reconstrucción de Irak (SIGIR) descubrió que "DynCorp parecía actuar casi independientemente de sus oficiales informantes en el Departamento de Estado, facturando a Estados Unidos por millones de dólares en trabajos que no estaban autorizados y comenzar otros trabajos sin autorización" (Glanz, 2007). El informe afirma que las conclusiones de la mala conducta de DynCorp en un trabajo de 188 millones de

dólares para comprar armas y construir viviendas para la policía iraquí fueron lo suficientemente serias como para justificar una investigación por fraude (Glanz, 2007). Un informe de auditoría del gobierno de Estados Unidos de octubre de 2007 reveló que se gastaron 1.300 millones de dólares en un contrato con DynCorp para entrenar a la policía iraquí (BBC, 2007).

En febrero de 2007, los auditores federales citaron a DynCorp por desperdiciar millones en proyectos, el gasto incluyó la adquisición de un escáner de rayos X de \$ 1.8 millones que nunca se usó, y la compra de 20 remolques VIP por \$ 4 millones de, y una piscina olímpica con dinero destinado a financiar un complejo policial iraquí (BBC, 2007). En abril de 2011, DynCorp acordó pagar 7,7 millones de dólares al gobierno de los Estados Unidos para resolver las reclamaciones de que había inflado por contratos de construcción en Irak (Glanz, 2007).



## **Capítulo 5: Problemas legales de las ESP en Irak**

Dado que estas empresas operan en la mitad del mundo, la visión tradicional de que las naciones son responsables de realizar negocios bajo ellas son complejas. Estas empresas operan y hacen negocios en muchos países diferentes, pero en este caso, operaron bajo la supervisión y financiación de los Estados Unidos. Incluso cuando estas empresas cometen crímenes de guerra, las organizaciones internacionales no responsabilizan a los países que las contrataron. Si bien el crimen es posible debido a la falta de políticas y estándares estatales sólidos, ningún estado ha sido considerado internacionalmente responsable por las actividades ilegales de sus contratistas de seguridad privada (Kinsey, 2005; Elsea et al., 2008; De Nevers, 2009; Palmer, 2018).

Dado que estas ESP son actores comerciales privados, están fuera del ámbito del derecho y la política internacional no se aplica de la misma manera que lo hacen los ejércitos estatales. Si bien estas empresas sirven a las misiones y objetivos del estado, no están sujetas a las mismas leyes y regulaciones a las que suelen estar sujetos los soldados estadounidenses con los que trabajan. Por una variedad de razones, la política exterior no responsabiliza a los actores individuales por sus crímenes, ni responsabiliza a los estados cuando sus contratistas cometen actos ilegales (Elsea et al., 2008). No sólo las personas y las empresas no son amonestadas cuando actúan injustamente, sino que la organización internacional tampoco es responsable ante los países que utilizan y financian sus actividades (Serrano & Martín, 2007; Palmer, 2018).

Las Naciones Unidas no emitieron la primera convención sobre el uso de ejércitos privados por las naciones hasta 1989. La convención reconoce que el uso de mercenarios viola la soberanía política de las naciones y el derecho a la autodeterminación de los pueblos, así como la conducta de estas empresas con asesinatos y actividades ilegales (Avant, 2005). La definición de mercenario

proporcionada incluye a una persona empleada y motivada para beneficio personal (Østensen, 2011). El acuerdo fue firmado por 35 signatarios que hasta ahora han acordado gestionar completamente sus asuntos militares a través de agencias gubernamentales (Palmer, 2018). Este acuerdo entró en vigor el 20 de octubre de 2001 y varios países, incluido los Estados Unidos y el Reino Unido, no fueron signatarios de este acuerdo durante la guerra de Irak (Avant, 2005). En octubre de 2007, las Naciones Unidas publicó un estudio que daba cuenta de, cómo a pesar de ser contratados como guardias de seguridad, los contratistas privados realizaron tareas militares (Higgins, 2007). Los académicos encuentran una dificultad para distinguir a las tropas militares nacionales de un país, de las tropas privadas de una empresa, teniendo en cuenta esta perspectiva, se crea un vacío legal a la hora de juzgar a estos actores no estatales. Por ejemplo, las tropas militares de un país son juzgadas por las mismas fuerzas armadas en una corte marcial, ahora bien, los contratistas no tienen una corte marcial, si no que su grado de organización los lleva a ser responsable frente a los accionistas. De esta forma, no se sabe si este personal privado debe ser juzgado por la empresa, el país que contrata a la empresa, el país donde se cometió el crimen, o una corte internacional (Leander, 2005; Dogru, 2010; Taylor, 2011). En cierto modo, cualquier personal militar que cumpla funciones con armamento, puede considerarse como un posible combatiente. Que quiere decir esto, la dificultad que existe en diferenciar a los privados de los públicos viene de la pauta que ambos son personal armado, y para la población, ambos son personal militar. Para el personal de seguridad, las pautas que le rigen ante la ley son diferentes a como lo hacen con respecto a los militares (Avant, 2006; Østensen, 2011).

Como se mencionó anteriormente, proporcionar seguridad puede considerarse como una participación directa en las hostilidades (Avant, 2005; Petersohn, 2017). Los estándares legales son muy bajos y casi no juegan ningún papel en la determinación del estado de los proveedores de



seguridad. Un caso contundente fue cuando en 2004, durante la guerra de Irak, la Autoridad Provisional de la Coalición declaró que las leyes iraquíes no se aplicaban a los contratistas, a este mandato se le llamó, la Orden 17, el cual establece que; los contratistas de seguridad no estarán sujetos a las leyes o reglamentos iraquíes en asuntos relacionados con los términos y condiciones de sus Contratos, siempre y cuando, no se involucren con Irak fuera de los contratos establecidos por las entidades correspondientes de cada país de la coalición. De todas formas, la Orden aún establece que, las Empresas de Seguridad Privada y sus empleados que operan en Irak deben cumplir con todas las Órdenes, Reglamentos, Memorandos de la Coalición y cualquier instrucción o reglamentación de implementación que rijan la existencia y las actividades de las ESP en Irak (COALITION PROVISIONAL AUTHORITY, 2006). Esta orden entró en vigor en diciembre de 2006, para ese momento, se pensaba que había al menos 100.000 contratistas militares privados trabajando directamente para el Departamento de Defensa de los Estados Unidos (COALITION PROVISIONAL AUTHORITY, 2006). El memorando establece claramente que las ESP deben hacer todo lo que esté a su alcance para evitar víctimas civiles y tratar a los civiles con humanidad. Contiene un lenguaje vago sobre el uso de la fuerza que los contratistas pueden usar para justificar la violencia contra civiles. La CPA asegura que la responsabilidad de estas empresas no estará sujeta a la ley iraquí, sino que aumenta la libertad que tienen estas empresas para llevar a cabo sus actividades (Petersohn, 2017).

En Irak, la cuestión de la rendición de cuentas, especialmente en el caso de los contratistas que portan armas, es delicada. Un incidente importante en 2007 involucró a los guardias de Blackwater que mataron a 17 civiles iraquíes en un tiroteo masivo en la plaza Nisour. El gobierno de Irak sostuvo que se trataba de un asesinato, pero no pudo procesar a los guardias porque tenían inmunidad. Un mes después de la masacre de la plaza Nisour, el gabinete iraquí aprobó un proyecto

de ley destinado a poner fin a la inmunidad de los contratistas (Alissa, 2007). Estos tendrían que recibir licencias para sus armas, registrar su equipo, incluidos vehículos blindados y helicópteros, y obtener visas, algo que antes no se requería cuando se trabajaba para una agencia de un país de la coalición (Alissa, 2007). Al mismo tiempo, la Cámara de Representantes de EE. UU. aprobó la Ley de Ejecución y Expansión de MEJA (H.R.2740) que habría sometido a los contratistas de seguridad de EE. UU. en Irak las leyes penales de EE. UU. sin embargo, el Senado nunca la votó (MEJA Expansion and Enforcement Act of 2007 (2007; 110th Congress HR 2740), n.d.). El mismo presidente se opuso a esta ley, este argumentaba que el Departamento apoyaba los esfuerzos para garantizar una mayor responsabilidad por las acciones ilegales que puedan cometer empresarios extranjeros. Sin embargo, la administración se opuso vehementemente a H.R. 2740 en su forma actual, debido a que el proyecto de ley impondría cargas inapropiadas e irrazonables al Departamento de Defensa. Además de la responsabilidad principal de llevar a cabo operaciones militares, las fuerzas armadas deberían realizar importantes funciones de gestión y retención de contratistas que no pertenecen al Departamento de Defensa mencionados en el proyecto de ley. Además, el proyecto de ley requeriría que el Departamento de Defensa, en medio de los conflictos armados en curso durante la guerra, ayude en las investigaciones criminales del FBI (MEJA Expansion and Enforcement Act of 2007 (2007; 110th Congress HR 2740), n.d.). De esta manera, se ve un claro apoyo por parte del poder presidencial hacia estas empresas, ya que era indispensable para un mejor funcionamiento, una menor presión legal sobre las ESP. Esto beneficia al accionar de las empresas, pero genera que la política no tenga control sobre estas. Debido a estas políticas inadecuadas, los empresarios a menudo no son acusados cuando cometen crímenes contra la humanidad. El incidente de Nisour Square es un ejemplo de cómo las EPS pueden aprovechar esta falta de política para asegurarse de evitar sanciones (Petersohn, 2017). Un sistema que regule el

accionar de las ESP no se aplica y las organizaciones internacionales no han regulado a estas empresas en el pasado. Este es otro ejemplo de cómo el Congreso y las agencias estadounidenses han pasado a la responsabilidad de administrar estas empresas. En lugar de implementar políticas específicas para el uso de empresas militares privadas, el Departamento de Defensa adoptó un sistema de gestión de otra empresa privada: ASIS International. El Congreso sigue evitando la rendición de cuentas. Recién para diciembre de 2008, un acuerdo sobre el estatuto de las fuerzas entre Irak y Estados Unidos sometió a los contratistas a la ley penal iraquí (Mason, 2012).



Universidad de  
**San Andrés**

## **Capítulo 6: Efectos políticos de las ESP.**

La contratación de las ESP genera diferentes efectos, tanto beneficiosos como perjudiciales para los Estados Unidos. En este apartado se analizan los efectos políticos de la contratación de estas entidades. Previamente se expusieron algunas cuestiones que ayudan a ver las ventajas y los costos políticos. A largo plazo, las ventajas que estas empresas proveían eran mayores comparadas con las desventajas (Avant, 2006), si bien esto es un análisis de factores militares, económicos y políticos, los primeros dos siendo no tratados en esta tesis, políticamente hablando, se generaron más desventajas que ventajas. Estas incluyen, la sobrecontratación de las empresas, la dependencia hacia las ESP, la pérdida del control político, la pérdida de balance de control entre el poder legislativo y el ejecutivo, el traspaso de funciones y la relación entre los funcionarios del gobierno y las ESP (Bjork & Jones, 2005; Avant, 2006; Zarco, 2012; Boyle, 2013)

### **6.1. Efectos políticos desventajosos**

#### **La sobrecontratación:**

Deborah Avant (Avant, 2006) argumenta que la calidad del país es una variable importante para determinar cómo enfrentar las consecuencias de la sobrecontratación. Los estados fuertes, que tienen mayores capacidades de control, están en mejores condiciones que los estados débiles para controlar las ESP y evitar la dependencia. Sin embargo, esto no los vuelve inmunes a las posibilidades de que se genere una sobrecontratación de ESP. La estrategia de contratación de los Estados Unidos se centraba en estas capacidades; primero, daba a los contratistas la retroalimentación de algunos sistemas de combate y, a veces, incluso la toma de control de estos (Avant, 2006; Isenberg, 2009). En segundo lugar, el ejército depende en gran medida de los contratistas para varios trabajos designados por el Servicio Central de Seguridad. Los empresarios empezaron a reemplazar las estructuras de poder en lugar de mejorar las capacidades orgánicas.

En tercer lugar, en la mayoría de los casos, no existen planes de contingencia para asegurar la implementación continua en caso de falla del contratista. Estas cualidades delimitaron el paso a que si bien, contra todo pronóstico, Estados Unidos generará una sobrecontratación de ESP durante el periodo de la guerra de Irak (Petersohn, 2017). De acuerdo con el Departamento de Defensa, de septiembre de 2007 a junio de 2009, el número de contratistas de seguridad aumentó de 6.068 a un máximo de 15.279, un aumento del 152% (Schwartz, 2011). Tal aumento se debió a dos factores; primero y principal se debió a ataques de grupos terroristas que aún trabajaban en Irak. Durante un discurso atendiendo a esta cuestión, Bush declaró que “He enviado más de 20.000 soldados estadounidenses adicionales a Irak. La gran mayoría de ellos, cinco brigadas, se desplegarán en Bagdad. Estas tropas trabajarán junto a las unidades iraquíes y estarán integradas en sus formaciones” (Office of the Press Secretary, 2007) Donde reiteró su compromiso para reducir estas hostilidades y llevar paz a Irak.

Segundo, las presiones para los militares estadounidenses aumentaron luego de la retirada de las fuerzas británicas. Estos últimos optaron por reducir su personal militar en 2007, el cual pasaría de ser de 7.700 efectivos, a 5.500 (BBC, 2007). Esto generó que los Estados Unidos debieran complementar la retirada de estas tropas aliadas, con mayor presencia americana en la zona. En todos estos casos hablamos en términos de tropas militares, esto se debe a que el gobierno americano no tenía la responsabilidad política de informar sobre el despliegue de nuevas ESP, ya que no formaban parte del cuerpo militar. De todas formas, durante la guerra de Irak, se puede decir que el movimiento de tropas traía consigo un movimiento de contratistas (Avant, 2006).

Sin embargo, de junio de 2009 a marzo de 2011, el número de contratistas de seguridad disminuyó en 6.072, o un 40% (Lejeune, 2009; Schwartz, 2011). Esto se debió a que en el año 2009 la situación en Irak empezó a apaciguarse, reduciendo en gran medida los enfrentamientos. Este

suceso coincide con el fin de la presidencia de Bush, y con el inicio del mandato de Obama, una administración más comprometida con solucionar los conflictos de medio oriente, con intenciones de eliminar gradualmente la presencia militar en Irak (Lejeune, 2009).

### **La dependencia del gobierno norteamericano hacia las ESP:**

Cuando Estados Unidos decidió contratar empresas para asumir más tareas de seguridad y logística en Irak; La creación de una sobrecontratación y el cambio de puestos de trabajo resultan en una fuerte dependencia del gobierno de los Estados Unidos de estas empresas. Español habla sobre los tres puntos que Ulrich Petersohn destaca cuando un Estado se vuelve dependiente de las ESP (Zarco, 2012). Estas son; cuando no se especifica el número mínimo de contratistas que debe emplear el gobierno antes de internarse en un conflicto. En este caso, el Departamento de Defensa nunca tuvo un número mínimo de contratistas, si no que fueron agregando contratos conforme escalaba el conflicto. Otro de los puntos de Petersohn tiene que ver cuando el gobierno busca seguridad en zonas de guerra específicas, lo cual lleva a ceder funciones específicas a los contratistas, funciones que anteriormente eran llevadas a cabo por las fuerzas militares, lo que genera que estas sean indispensables para la continuidad de la campaña. Y el último factor sucede cuándo el Estado tiene la posibilidad de cambiar las partes del contrato según sea necesario sin una evaluación correspondiente, generando nuevos contratos ni bien aparecen nuevas amenazas de seguridad (Zarco, 2012). Las tendencias similares a como ocurrió en Irak están claramente conduciendo a una mayor dependencia de una industria militar privatizada: Arabia Saudita depende de muchas empresas para brindar servicios que van desde sistemas de defensa aérea hasta capacitación y asesoramiento a sus fuerzas terrestres, marítimas y aéreas. Estados Unidos depende de los PMC para la logística, la guerra de información, la vigilancia aérea, los sistemas informáticos y las comunicaciones (Cook, 2002). La misma lógica de privatización de la seguridad

también tiende a ceder el control de los instrumentos de violencia a actores no estatales como las ESP. En Irak, por ejemplo, la Autoridad Provisional de la Coalición exige contratos de seguridad en Irak. De hecho, esto ha generado que empresas de seguridad privada, tuvieran el control sobre las decisiones de seguridad (Avant, 2006). Un informe llamado -Iraq Relief and Reconstruction Fund (IRRF)- tiene relevados los contratos más importantes de la reconstrucción de Irak. En estos se encuentran varios incisos con respecto a la seguridad en Iraq, contratos cedidos a ESP para que se hicieran cargo de las decisiones que respetan a la seguridad, tanto del país, como la de las fuerzas de coalición (IRRF, 2003). La empresa que recibió uno de los contratos más importantes de seguridad, fue Parsons Delaware Inc, la cual es reconocida por administrar programas a gran escala y diseñar instalaciones innovadoras en nuevos mercados. En el momento eran una empresa especialista en la desmilitarización de municiones y el manejo seguro de municiones sin detonar. En 2004, Parsons Delaware Inc. recibió un contrato, de \$900 millones, para brindar servicios de diseño y construcción de instalaciones de seguridad y justicia iraquíes (IRRF, 2003). Esto generó que las decisiones con respecto a la seguridad de Irak pasaran a manos de un ESP, de esta forma, un trabajo que anteriormente se le delegaba a las fuerzas estatales, ahora depende de una entidad privada, lo que redujo en gran medida la capacidad de acción de las fuerzas militares, un caso que se verá a continuación.

### **La pérdida del control político:**

Durante la guerra de Irak, Estados Unidos no había podido consolidar un buen sistema con herramientas y mecanismos que controlan el uso de las ESP, esto generó una pérdida en el control político de las ESP durante la guerra de Irak. En situaciones militares, el control político se refiere a quién posee la capacidad para poder desplegar una fuerza de combate (Petersohn, 2017). Los líderes estadounidenses carecieron de una supervisión y comprensión adecuada del papel de los

contratistas, lo que resultó en una pérdida significativa de control político. La incorporación de las ESP en el ejército planteó un problema de gran envergadura para las fuerzas estadounidenses ya que las ESP podían afectar las operaciones militares. Esto se debió a que la capacidad de los líderes militares para influir en el comportamiento de las empresas era limitada, posibilitando la pérdida de control de Estados Unidos. El empleo de empresas militares privadas impacta sobre el proceso de toma de decisiones. De esta forma, las empresas de seguridad privada se han visto empoderadas política y comercialmente por estas transformaciones (Abrahamsen & Williams, 2007). El uso de ESP puede limitar las capacidades de los generales para decidir cuándo, dónde y cómo usar la fuerza. Aunque son parte de una fuerza mayor como apoyo a las tropas para lograr sus objetivos, no son parte del ejército y su accionar no puede coincidir con el mando y control que el ejército sostiene. Dependiendo de la relación del contratista con las fuerzas armadas, su utilidad como herramienta varía a discreción del comandante (Petersohn, 2017). Estos deben gestionar a los subcontratistas que tengan una relación contractual con las fuerzas armadas, de modo que sirvan como mecanismo de apoyo a los planes militares del alto mando. Esto puede ralentizar la capacidad de toma de decisiones de los generales, debido a que la relación entre las ESP y el ejército no es meramente más que una gestión, la cual es una forma de influencia más débil que el liderazgo, como lo es la burocracia de la milicia.

En primer lugar, la gestión puede ser un proceso que requiere mucho tiempo. Para empezar, el alistamiento plantea cuestiones legales difíciles que van más allá del trabajo diario de un jefe del ejército. La situación se complica si la empresa subcontrata parte de sus servicios (Petersohn, 2017). En segundo lugar, las ESP no se pueden utilizar fuera de sus obligaciones de contrato; cuando las condiciones en el campo de batalla cambian, el comandante debe negociar y cambiar la naturaleza del contrato que las ESP sostienen con el gobierno americano. Este proceso puede



ser posible, ya que la predisposición a ejercer nuevos contratos está bajo el mando del Departamento de Defensa, el cual podría alterar los contratos sin la necesidad de largas burocracias. Sin embargo, el proceso de gestión entre las ESP y los militares lleva más tiempo que el comando y, por lo tanto, limita la capacidad de maniobra del ejército durante el planeamiento de estrategias (Petersohn, 2017). Este suceso es el resultado de cambios más amplios sobre la provisión de seguridad en los países desarrollados y en desarrollo, y debido a la percepción prevaleciente de que las autoridades no pueden brindar seguridad y protección adecuadas (Abrahamsen & Williams, 2007).

### **El traspaso de funciones:**

La misma lógica de privatización de la seguridad también tiende a ceder el control de los instrumentos de seguridad públicos, a actores no estatales. En Irak, por ejemplo, la Autoridad Provisional de la Coalición exige contratos de seguridad en Irak. Hacer que la seguridad sea responsabilidad de las empresas privadas pone en discusión sobre si la seguridad es un bien público exclusivo o un bien colectivo (Avant, 2006). El caso más emblemático de esta cuestión tiene que ver con el escándalo de Abu Ghraib. El gobierno americano había traspasado las funciones de interrogación de los prisioneros de guerra a empresas como CACI y Titan Corp, lo cual generó situaciones desfavorables tanto para los contratistas, como para el gobierno americano. La interrogación, y lo que ello conllevaba, pasó a ser un trabajo de los contratistas, la evidencia muestra que estos aprovecharon en más de un caso su poder dentro de la prisión para cometer crímenes de lesa humanidad, sin fuertes repercusiones. Esto se debió a una dependencia excesiva de contratistas privados que proporcionaban personal poco capacitado para esos trabajos (Isenberg, 2004).

### **La pérdida de balance de control entre el poder legislativo y el ejecutivo:**

La decisión de nombrar al PMC la toman los líderes del país y es difícil de controlar para su parlamento. Por tanto, el ejecutivo tiene una ventaja sobre el legislativo. La misma flexibilidad que hace que los PSC sean tan beneficiosos también redistribuye el poder dentro de los Estados Unidos, empoderando al ejecutivo sobre el Congreso, reduciendo la transparencia y facilitando que estas empresas con intereses comerciales diversos puedan influenciar en las políticas (Avant, 2006). A corto plazo, la reducción de la transparencia puede afectar la capacidad de asumir la responsabilidad de los políticos de acuerdo con sus decisiones. Sin embargo, todos estos factores se llevan a cabo juntos, reduciendo el costo político de la acción y aumentando la capacidad avanzada de la fuerza. Aunque los menores costos políticos pueden beneficiarse en casos individuales, también pueden reducir la moderación típica entre los sistemas políticos democráticos. Algunas personas ven la moderación democrática como un beneficio en sí mismo y también están relacionadas con; una mayor confianza mutua para las relaciones diplomáticas, menor probabilidad de internarse en conflictos y una mejor efectividad militar. En la medida en que las opciones de seguridad privada faciliten la adopción de medidas para enfrentar los problemas de seguridad, estos beneficios pueden disminuir. (Avant, 2006).

## **Capítulo 7: Efectos Económicos**

Además de las ventajas políticas analizadas en el apartado anterior, el uso de ESP tiene ventajas económicas muy importantes para los Estados Unidos, el incremento en el uso de contratistas en Irak redujo en gran medida los costos derivados del entrenamiento militar, uniformes, armas y equipo, así como reducciones en los costos asociados con el seguro proporcionado a los seres queridos en caso de muerte o incapacidad de combate. Como mencionamos anteriormente, la contratación de Empresas de Seguridad privada provee una solución para reducir en gran medida los costos militares para la guerra. Su uso no requiere gasto en entrenamiento ni en despliegue, si bien son factores que se tienen en cuenta para la realización de un contrato con el Estado, estos costos son menores a tener que entrenar tropas a costa del gasto estatal. Los costos de la guerra de Irak de 2003-2010 a menudo son cuestionados por los académicos, ya que no se tienen en cuenta muchos otros costos ocultos que no están en documentos oficiales. En 2020, Neta Crawford, presidenta de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad de Boston, estimó en su proyecto Cost of War el costo a largo plazo de la guerra de Irak para los Estados Unidos en \$1,922 trillones. Esta cifra incluye no solo el dinero destinado explícitamente al Pentágono para la guerra, sino también los gastos del Departamento de Estado en Irak, la atención médica para los veteranos de la Guerra de Irak y otros costos. Los gastos directos del Departamento de Defensa de los Estados Unidos en Irak totalizaron al menos \$757.800 millones, incluso más (Crawford, 2020). El Departamento de Defensa incurrió en contratos por aproximadamente \$15,4 billones en el área de operaciones iraquí en el año fiscal 2010, lo que representa el 20% del gasto total en estas áreas. Desde el año fiscal 2005 hasta el año fiscal 2010, el Departamento de Defensa comprometió alrededor de \$112,8 billones en contratos, lo que representa el 19% de los compromisos totales para operaciones en Irak (Schwartz, 2011).

Ahora bien, teniendo en cuenta las afirmaciones del vicepresidente Dick Cheney antes del inicio de la guerra, en las cuales destacaba que la guerra costaría alrededor de \$80 billones de dólares, más \$10 billones de dólares por cada año que transcurriera. Si bien hoy en día tenemos toda la información completa, y podemos decir que sus estimaciones fueron un tanto equívocas, el gobierno tenía que basar la campaña militar en estimaciones, caso de la contratación de las ESP, ya que, para desplegar esas organizaciones, uno de los requisitos era que los costos de las empresas fueran menores al costo de desplegar soldados americanos. De esta forma, el Departamento de Estado hacía métricas para definir qué opción era más viable. En términos económicos, un buen ejemplo de esto fue la contratación de la empresa Kellogg, Brown & Root (CBO, 2005). La Oficina de Presupuesto del Congreso, tenía que determinar que era mejor económicamente para defender 82 sitios de alto interés en Iraq. Kellogg, Brown & Root estimó que el costo de brindar apoyo logístico a los 82 sitios bajo la Orden de Trabajo 59 sería de \$5,2 billones entre junio de 2003 y junio de 2004. La Oficina de Presupuesto del Congreso aumentó esa estimación en un 11 por ciento, a \$5,9 billones, para llegar a un costo anualizado para toda la orden de trabajo. La Oficina de Presupuesto del Congreso estimó el costo incremental de proporcionar esta logística utilizando unidades del Ejército en lugar de contratos LOGCAP, o ESP. Los costos incrementales son los costos en los que incurrirá el Ejército por encima de los montos ya presupuestados para las operaciones militares convencionales de las unidades existentes. Por ejemplo, los costos de capacitación en tiempo de paz y los salarios básicos para el personal de la unidad del Ejército que ya está en la estructura de la fuerza no se agregarían y, por lo tanto, no se incluyeron en la estimación de costos. La OPC estimó que costaría 78,4 billones de dólares durante 20 años cubrir esta logística utilizando unidades del ejército. Las unidades desplegadas para proporcionar logística representarían \$42,7 billones de ese costo, mientras que se necesitan \$35,7 billones

adicionales para mantener una base rotativa de operaciones de emergencia que ha estado funcionando durante más de un año (CBO, 2005).

Visto de esta manera, la contratación de ESP genera un efecto económico a favor reduciendo en gran medida los costos, principalmente debido a que el entrenamiento de los contratistas y toda la logística, está cubierta por la empresa, y no representa un gasto muy grande. Este es un beneficio a largo plazo, ya que el gobierno contrata a la empresa que cubre los costos de comidas, seguros, transporte, armas y más, para cada uno de sus trabajadores.

### 7.2 Efectos económicos desventajosos.

Por otro lado, algunos de los problemas que surgen de la contratación se relacionan con el escaso control del Congreso sobre los presupuestos que se le asignan. En primer lugar, la imposibilidad de poder poner un fin a la guerra, entre otras cosas, supuso un aumento de la contratación de ESP, superando el presupuesto previsto, generando una sobre contratación de empresas, ergo, un sobre gasto por parte de los Estados Unidos. En segundo lugar, el control estatal deficiente ha causado problemas con los controles de administración de dinero, lo que ha alimentado los debates políticos sobre los pagos multimillonarios al gobierno.

Por otro lado, los vínculos entre algunos políticos y algunas ESP, crearon problemas de corrupción y despilfarro, regalando grandes sumas de dinero, así también por los problemas que generaban el alistamiento de las tropas, algunos de estos casos terminaron con escándalos políticos; el caso más emblemático fue el del exvicepresidente Dick Cheney, que se pasa a analizar a continuación.

### Dick Cheney: problemas con su carrera en el sector privado.

La situación política donde se enmarca la guerra con Irak se sitúa en la presidencia de Bush. Un elemento clave para una real comprensión de la coyuntura política de entonces es el conocimiento de Dick Cheney, vicepresidente de Bush quien tuvo problemas con el sector privado. Es de público conocimiento que algunas ESP aprovechaban las conexiones políticas con el gobierno americano para obtener contratos preferenciales. También existieron casos de ESP que utilizaban las donaciones de campaña política para ganar influencia sobre los políticos (Isenberg, 2004).

Una auditoría del Pentágono descubrió que la empresa Halliburton, una corporación estadounidense que se dedica a la prestación de servicios en los yacimientos petrolíferos de muchos países estaba sobrecargando 61 millones de dólares en el transporte de gasolina a Irak (Halliburton, 2021). Esto representa una gran controversia en lo que fue la Guerra de Irak, debido a la relación que esta empresa mantenía con el vicepresidente de los Estados Unidos durante el conflicto, Dick Cheney. El político y empresario estadounidense, fue vicepresidente durante todo el mandato de George W. Bush, y fue el principal artefacto de controversias con respecto a irregularidades en los contratos que se efectuaban para las ESP en Irak.

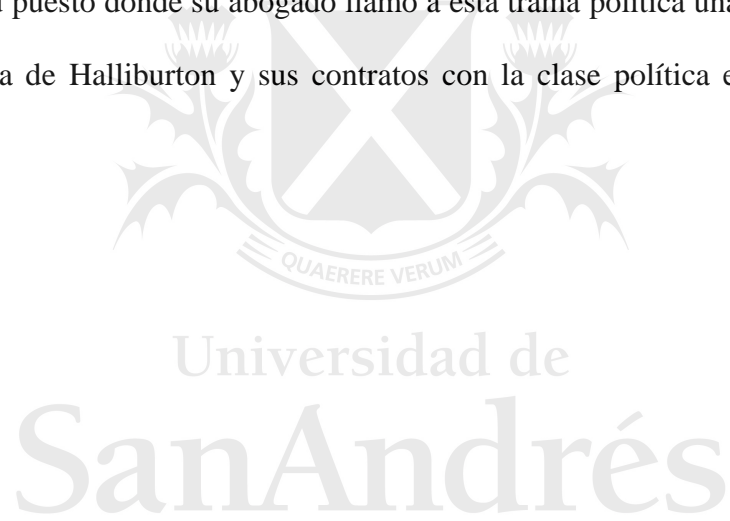
Cheney fue consejero delegado de Halliburton desde 1995, terminó su trabajo en la empresa durante las elecciones del 2000, luego, la victoria de Bush hizo que su carrera se tornase hacia la política (Teather, 2004). Por el 2003, Halliburton poseía varias empresas en todo el mundo. Una de estas Kellogg, Brown and Root, fue foco de controversias cuando una investigación del Pentágono descubrió que esta subsidiaria, encargada de transportar combustible a Irak bajo un contrato de ESP con el gobierno de los Estados Unidos, estaba cometiendo diversos fraudes (Democracy Now, 2003; Teather, 2004) (. Este contrato tenía un valor de 15.6 billones de dólares, pero varias investigaciones deliberaron que la empresa estaba aumentando sus precios al cobrar

más de 67 millones de dólares a los esfuerzos militares de los Estados Unidos. Las alegaciones hacia Halliburton sobre el sobrecosto del combustible no son las primeras hacia la empresa, ya que, en otras ocasiones, esta ESP ha tenido gastos cuestionables en el pasado. Henry Waxman, miembro del partido Republicano como representante de California, principal crítico de este contrato y otros similares, describió este suceso como una situación en la cual "Halliburton ha estado engañando a los contribuyentes y la Casa Blanca ha permitido que se salgan con la suya" (Democracy Now, 2003). Kellog, Brown & Root recibió aproximadamente \$300 millones de dólares de parte del gobierno de los Estados Unidos en Irak en sus contratos. Por medio de una aseguradora, la ESP también aseguraba todos sus activos por un monto total de \$284 millones de dólares, dinero pagado por el gobierno y no la empresa privada. Sin embargo, de este monto millonario, sólo se usaron \$73 millones de dólares en indemnizar a los empleados, el resto del dinero nunca apareció y se presume que los directivos de KBR y la aseguradora se llevaron más de \$100 millones de dólares (Isenberg, 2009; Zarco, 2012). El comentario oficial del Pentágono fue que "la situación en Irak como zona de guerra justificaba los altos costos del programa de seguros" (Zarco, 2012).

Aparentemente, Halliburton no parece haber sacado provecho de este sobrecosto, en su lugar, había pagado demasiado a una subcontratista por el combustible en primer lugar. La compañía negó el cargo de sobre cobro y lo consideró como una auditoría de rutina que no representaba nada. Esta auditoría partió de la base de que una empresa con características similares provee combustible de Kuwait a los iraquíes a 0.98 dólares, mientras que la subsidiaria de Halliburton cobraba 2.50 dólares el galón y en algunas ocasiones, hasta 3.09 dólares (Democracy Now, 2003).

Paralelamente, el vicepresidente Dick Cheney recibía pagos diferidos de 150,000 dólares anuales por parte de Halliburton; para el 2004, había recibido 394,548 dólares por parte de la empresa,

mientras se desempeñaba como vicepresidente de los Estados Unidos (Democracy Now, 2003). Brunnatine Greenhouse, una funcionaria del gobierno estadounidense, que se desempeñaba como directora de contratación para el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos, testificó en 2005 en contra de Halliburton alegando casos específicos de despilfarro, fraude y otras irregularidades en los contratos entre el gobierno y esta ESP desde el inicio de las operaciones de esta empresa con el gobierno de los Estados Unidos en 2003. Greenhouse describió el contrato entre la subsidiaria Kellog, Brown and Root, como “el abuso contractual más flagrante e indebido que he presenciado durante el curso de mi carrera profesional” (Tucker, 2005). Para agosto de 2005, fue degradada de su puesto donde su abogado llamó a esta trama política una clara represalia por su trabajo en contra de Halliburton y sus contratos con la clase política estadounidense (D.C Politics, 2011).





## **Conclusiones:**

La seguridad privada tiene muchas ventajas. Primero, puede proporcionar refuerzo y flexibilidad. Como hemos visto en Irak, las ESP pueden proporcionar una capacidad "mejorada" para el despliegue rápido de fuerzas adicionales, sin las demoras políticas y burocráticas necesarias para movilizar la fuerza militar; las empresas de seguridad privada pueden mover fuerzas para realizar una variedad de tareas. Estas fuerzas pueden aparecer rápidamente y pueden desvanecerse una vez superado el peligro o se capacitan y despliegan las fuerzas locales; los contratos pueden expirar y este personal puede ser desmovilizado rápidamente.

Debido a los acuerdos de desmilitarización siguientes al final de la guerra fría, Estados Unidos sufrió una baja considerable del personal militar. Las ESP supieron aprovechar esta falta en las filas del ejército, y aprovecharon sus capacidades de despliegue y profesionalismo para unirse a las campañas de Estados Unidos por contratos millonarios. Constitucionalmente, las ESP representaron un mecanismo por el cual el poder ejecutivo supo pasar por encima del congreso en cuestiones militares durante toda la guerra de Irak. Si bien las cámaras tenían mucha incidencia en cuestiones de la guerra, las ESP estaban fuera de su autoridad, sólo tenían la decisión del presupuesto que se iba a destinar para la contratación de estas.

En segundo lugar, puede proporcionar fuerzas especializadas. Estas empresas reclutan a militares y policías, la mayoría de los cuales están jubilados o desempleados, de una base de datos que presenta todo tipo de especialización de acuerdo con las necesidades emergentes. Este factor facilita la contratación de personas con conocimientos específicos ya que es difícil para las organizaciones militares nacionales encontrar y desplegar estas habilidades y experiencia específicas en un área en particular.

Las ESP serían menos costosas de implementar política y económicamente hablando. No representan tantos problemas políticos como lo hacen las fuerzas nacionales, y su despliegue requiere de un menor costo fiscal. El movimiento político para la contratación de estas empresas es muy bajo, por lo que no hace falta tener mucho apoyo tanto del público como en el congreso para poder contratar a estas empresas. Los contratistas privados tienen fines de lucro y se seleccionan a sí mismos; el envío al extranjero no está sujeto a los mismos criterios del envío de un ejército nacional a trabajar para su país. Por lo tanto, después del final de la Guerra Fría, cuando las fuerzas estadounidenses se redujeron para cumplir con los requisitos políticos, la contratación de tareas como la logística a través de LOGCAP les permitió a los Estados Unidos la posibilidad para poder cumplir con una campaña más eficiente en Irak.

Si bien la utilización de ESP resulta conveniente para agregarlas a las capacidades militares, esta alternativa incluye diversos problemas y circunstancias que tienen que ser evaluadas de la mejor manera posible antes de la contratación de dichas empresas. Un riesgo práctico importante es la falta de claridad jurídica. La Law of War (De Nevers, 2009) está diseñada para ejércitos convencionales. El estatus legal de las personas desplegadas por una ESP a menudo no está claro, sobre todo en el periodo de la guerra de Irak, al igual que el mecanismo mediante el cual se ejercen sus derechos y responsabilidades. Esto plantea desafíos tanto para el personal de seguridad privada como para los operadores. En cuanto al personal de seguridad privada, su situación legal no está clara, a menos que el gobierno los autorice, ya que no son combatientes ni no combatientes. No se les puede conceder la condición de prisioneros de guerra si son capturados por el enemigo y pueden ser ejecutados como combatientes ilegales o acusados de asesinato si matan a otros.

Este vacío legal también genera más riesgos para el personal de seguridad. Nuevamente, a menos que lo autorice el gobierno, el personal de seguridad privada no está sujeto al sistema de justicia

militar. Cuando los agentes de seguridad privada infringen la ley, es difícil saber cómo tratar con ellos, especialmente cuando las instituciones locales son débiles.

La prolongación del conflicto resulta un factor clave para entender el funcionamiento de las ESP. Irak es un claro ejemplo donde la extensión de la guerra resultó ser perjudicial para los países que tenían contratos con contratistas de seguridad. Los beneficios de corto plazo asociados al uso de las ESP se ven neutralizados por sus costos políticos y económicos para el o los gobiernos de turno. Esto se debe a que las empresas generan efectos; de sobrecontratación, la dependencia del gobierno norteamericano hacia las ESP, la pérdida del control político, el traspaso de funciones, la pérdida de balance de control entre el poder legislativo y el ejecutivo, los casos de corrupción, son desventajas políticas del uso de las ESP que tienen que tenerse en consideración antes de tomar cualquier decisión. Estos factores alteran mucho la eficiencia de las ESP y su despliegue. La sobrecontratación genera un sobregasto y un exceso de personal desplegado, lo que dificulta la comunicación, sin olvidar que genera un mayor costo económico. La dependencia del gobierno norteamericano a las ESP se debió a la necesidad intrínseca de los Estados Unidos de necesitar las ESP para poder salir victorioso de la guerra de Irak. La pérdida de control político significó que no hubo ningún control de los Estados Unidos sobre estas empresas, lo que generó diversos casos de abuso de derechos humanos. El traspaso de funciones produjo una gran discordia entre los militares y el Departamento de Estado ya que se le dieron funciones que eran, por cuestiones estratégicas, de las fuerzas militares, reduciendo las capacidades de funcionamiento de los altos mandos militares. La pérdida de balance de control generó que la presidencia de Bush pudiera pasar por sobre el congreso con la contratación de ESP, desbalanceado la balanza de poder que existía entre estos. Por último, los casos de corrupción hicieron que se perdiera la confianza hacia la clase política.

Económicamente hablando, no todo fue ventaja para los Estados Unidos. La extensión en el tiempo de la guerra de Irak generó un aumento en la cantidad de ESP desplegadas en Irak lo cual fue un costo económico considerable. A este inconveniente se sumó el derivado de los casos donde se sobre facturó mucho más de lo que se había anticipado. El despilfarro fue un caso muy común en las relaciones entre el Estado y las ESP. El caso de Dick Cheney muestra un ejemplo de la cantidad de dinero malversado de algunas de estas empresas donde por relaciones políticas, no hubo ningún responsable de ese mal uso de fondos.

De esta forma, podemos afirmar que las tres hipótesis mencionadas y analizadas a lo largo de este estudio se confirman de modo total. El caso de la guerra de Irak sirve como contexto explicativo de las ESP en su totalidad y de las hipótesis. La necesidad de insertar a las Empresas de Seguridad Privada en el ámbito militar proviene de una falta en el personal desplegable, y en las trabas constitucionales que Estados Unidos presentaba frente a escenarios bélicos. La falta de regulación sobre estas entidades permitió que el poder ejecutivo pudiera permitirse de ellas de manera más simple y sin las trabas burocráticas del congreso, de todas formas, esta falta de regulación también represento una desventaja para el gobierno ya que la falta de control político, genero problemas a largo plazo.

Puesto todo esto en perspectiva, podemos concluir que el uso de ESP en Irak generó mayores desventajas que ventajas, todas las cuestiones mencionadas anteriormente devienen de un mal manejo y una ineffectividad de controlar a las empresas que proveían estos servicios. De tal forma que si se puede garantizar un sistema de gestión que pueda controlar a las ESP, su implementación en la esfera militar traería principalmente ventajas, políticas como económicas.

## **Bibliografía:**

- Abrahamsen, R., & Williams, M. C. (2007). Securing the City: Private Security Companies and Non-State Authority in Global Governance. *International Relations*, 21(2), 237-253.  
<https://doi.org/10.1177/0047117807077006>
- Akcinaroglu, S., & Radziszewski, E. (2013). Private Military Companies, Opportunities, and Termination of Civil Wars in Africa. *Journal of Conflict Resolution*, 57(5), 795-821.  
<https://doi.org/10.1177/0022002712449325>
- Alissa, R. (2007). *Iraqi Cabinet Votes to End Security Firms' Immunity*. New York Times.  
[https://www.nytimes.com/2007/10/31/world/middleeast/31iraq.html?\\_r=1&scp=4&sq=order%2017&st=cse](https://www.nytimes.com/2007/10/31/world/middleeast/31iraq.html?_r=1&scp=4&sq=order%2017&st=cse)
- Appendix 3. (2003). Obama White House Archives. Retrieved December 14, 2021, from  
[https://obamawhitehouse.archives.gov/sites/default/files/omb/assets/omb/legislative/2207\\_appx3.pdf](https://obamawhitehouse.archives.gov/sites/default/files/omb/assets/omb/legislative/2207_appx3.pdf)
- Apuzzo, M. (2014, October 22). *Blackwater Guards Found Guilty in 2007 Iraq Killings*. The New York Times. Retrieved December 18, 2021, from  
[https://www.nytimes.com/2014/10/23/us/blackwater-verdict.html?\\_r=0](https://www.nytimes.com/2014/10/23/us/blackwater-verdict.html?_r=0)
- Arenal Lora, L., & Domínguez Díaz, F. A. (2020). *Estudios contemporáneos sobre geopolítica, conflictos armados y cooperación internacional*.
- Artehistoria. (2017). *El final de la Guerra Fría* | [artehistoria.com](http://artehistoria.com). Artehistoria. Retrieved February 18, 2022, from <https://www.artehistoria.com/es/contexto/el-final-de-la-guerra-fr%C3%ADa>
- Avant, D. (2005). Private security companies. *New Political Economy*, 10(1), 121-131.  
<https://doi.org/10.1080/13563460500031297>
- Avant, D. D. (2006). The Privatization of Security: Lessons from Iraq. *Orbis*, 50(2), 327-342.  
<https://doi.org/10.1016/j.orbis.2006.01.009>
- Avant, D., & Neu, K. K. (2019). The Private Security Events Database. *Journal of Conflict Resolution*, 63(8), 1986-2006. <https://doi.org/10.1177/0022002718824394>
- BBC NEWS | UK | UK Politics | Blair announces Iraq troops cut. (2007, February 21). *BBC News*.  
[http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk\\_news/politics/6380933.stm](http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/politics/6380933.stm)
- BBC News. (2007, February 21). BBC NEWS | UK | UK Politics | Blair announces Iraq troops cut. *BBC News*. [http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk\\_news/politics/6380933.stm](http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/politics/6380933.stm)
- BBC. (2007). *US-Iraqi contract 'in disarray'*. BBC News, from  
<http://news.bbc.co.uk/2/hi/americas/7057629.stm>

- BBC. (2007, October 8). BBC NEWS | Middle East | Iraq urges Blackwater prosecution. *BBC News*.  
[http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle\\_east/7033048.stm](http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/7033048.stm)
- BBC. (2011, February 28). *Danny Fitzsimons jailed for Iraq security guard murders*. BBC. Retrieved December 19, 2021, from <https://www.bbc.com/news/uk-england-manchester-12594245>
- Binningsbø, H. M., & Dupuy, K. (2009). Using Power-Sharing to Win a War: The Implementation of the Lomé Agreement in Sierra Leone. *Africa Spectrum*, 44(3), 87-107.  
<https://doi.org/10.1177/000203970904400305>
- Bjork, K., & Jones, R. (2005). Overcoming Dilemmas Created by the 21st Century Mercenaries: Conceptualising the use of private security companies in Iraq. *Third World Quarterly*, 26(4-5), 777-796. <https://doi.org/10.1080/01436590500128014>
- Bloomberg. (2021). KBR Inc - Company Profile and News. *Bloomberg.com*.  
[https://www.bloomberg.com/profile/company/KBR\\*:MM?sref=G4ZwBfC0](https://www.bloomberg.com/profile/company/KBR*:MM?sref=G4ZwBfC0)
- Bowman, T., & Chatterjee, P. (2011, May 17). *As U.S. Military Exits Iraq, Contractors To Enter*. NPR. Retrieved December 19, 2021, from <https://www.npr.org/2011/05/17/136357821/as-u-s-military-exits-iraq-contractors-to-enter>
- Boyle, M. (2013). *How the US Public was Defrauded by the Hidden Costs of the Iraq War*. Global Policy Forum. Retrieved December 14, 2021, from <https://archive.globalpolicy.org/pmscs/52336-how-the-us-public-was-defrauded-by-the-hidden-costs-of-the-iraq-war.html%3Fitemid=id.html#50154>
- Bures, O. (2005). Private military companies: A second best peacekeeping option? *International Peacekeeping*, 12(4), 533-546. <https://doi.org/10.1080/13533310500201951>
- Butt, A. I. (2019). *Why did the United States Invade Iraq in 2003?* *Security Studies*, 28(2), 250-285.  
<https://doi.org/10.1080/09636412.2019.1551567>
- Center for Public Integrity. (2004). *Titan Corporation*. Center for Public Integrity.  
<https://web.archive.org/web/20041019134732/http://publicintegrity.org/wow/bio.aspx?act=pro&ddlC=159>
- Chatterjee, P. (2003, December 12). *Halliburton and Private Military Contractors Strike it Rich in Iraq*. Democracy Now! Retrieved December 17, 2021, from [https://www.democracynow.org/2003/12/12/halliburton\\_and\\_private\\_military\\_contractors\\_strike](https://www.democracynow.org/2003/12/12/halliburton_and_private_military_contractors_strike)
- CICR. (2010, October 29). *Armas convencionales - CICR*. Retrieved February 18, 2022, from <https://www.icrc.org/es/doc/war-and-law/weapons/conventional-weapons/overview-conventional-weapons.htm>

- CIRCULAR NO. A-76 (2016). *EXECUTIVE OFFICE OF THE PRESIDENT OFFICE OF MANAGEMENT AND BUDGET*. In . (Ed.). WASHINGTON, D.C., WA: White House.
- CNN Editorial Research. (2013, October 30). *Iraq Prison Abuse Scandal Fast Facts*. CNN.  
<https://edition.cnn.com/2013/10/30/world/meast/iraq-prison-abuse-scandal-fast-facts/index.html>
- CNN. (2012, November 3). *Defense contractor ordered to pay millions to National Guard soldiers*. CNN.  
Retrieved December 19, 2021, from <https://edition.cnn.com/2012/11/02/justice/oregon-national-guard-lawsuit>
- COALITION PROVISIONAL AUTHORITY. (2006). COALITION PROVISIONAL AUTHORITY ORDER NUMBER 17 (REVISED). In *STATUS OF THE COALITION PROVISIONAL AUTHORITY, MNF - IRAQ, CERTAIN MISSIONS AND PERSONNEL IN IRAQ* . Retrieved from [https://web.archive.org/web/20071005032102/http://www.cpa-iraq.org/regulations/20040627\\_CPAORD\\_17\\_Status\\_of\\_Coalition\\_Rev\\_with\\_Annex\\_A.pdf](https://web.archive.org/web/20071005032102/http://www.cpa-iraq.org/regulations/20040627_CPAORD_17_Status_of_Coalition_Rev_with_Annex_A.pdf)
- Cole, A. (2009, September 5). Firm Fires U.S. Embassy Guards in Kabul. *Wall Street Journal*.  
[https://www.wsj.com/articles/SB125211017112687951?mod=googlenews\\_wsj](https://www.wsj.com/articles/SB125211017112687951?mod=googlenews_wsj)
- Cook, T. (2002). *Dogs of war or tomorrow's peacekeepers?: The role of mercenaries in the future management of conflict*. 12.
- Crowell, W. P., Contos, B. T., DeRodeff, C., Dunkel, D., & Cole, E. (2011). *Physical and Logical Security Convergence: Powered By Enterprise Security Management*. Elsevier Science.  
[https://books.google.com.ar/books?id=a4h\\_c4TqZM4C](https://books.google.com.ar/books?id=a4h_c4TqZM4C)
- D.C Politics. (2011, July 26). A bittersweet win for a whistleblower. *The Washington Post*.  
[https://www.washingtonpost.com/local/dc-politics/a-bittersweet-win-for-a-whistleblower/2011/07/26/gIQA8pJUbI\\_story.html](https://www.washingtonpost.com/local/dc-politics/a-bittersweet-win-for-a-whistleblower/2011/07/26/gIQA8pJUbI_story.html)
- De Nevers, R. (2009). Private Security Companies and the Laws of War. *Security Dialogue*, 40(2), 169-190. <https://doi.org/10.1177/0967010609103076>
- Democracy Now. (2003, December 12). *Halliburton and Private Military Contractors Strike it Rich in Iraq*. Democracy Now! Retrieved December 18, 2021, from [https://www.democracynow.org/2003/12/12/halliburton\\_and\\_private\\_military\\_contractors\\_strike](https://www.democracynow.org/2003/12/12/halliburton_and_private_military_contractors_strike)
- Dogru, A. K. (2010). *OUTSOURCING, MANAGING, SUPERVISING, AND REGULATING PRIVATE MILITARY COMPANIES IN CONTINGENCY OPERATIONS*. 145.
- Dunne, T., Kurki, M., & Smith, S. (2016). *International Relations Theories Discipline and Diversity* (Fourth ed.). N.p.: Oxford University Press.
- Elesa, J. K., Schwartz, M., & Nakamura, K. H. (2008). *Private Security Contractors in Iraq: Background, Legal Status, and Other Issues*. 60.

ers?: *The role of mercenaries in the future management of conflict*. 12.

Fainaru, S., & al-Izzi, S. (2007, September 17). *The Global Intelligence Files - [OS] US/IRAQ: Blackwater's earlier scandals; Coalition Provisional Authority granted contractors immunity from Iraqi legal process*. WikiLeaks. Retrieved December 19, 2021, from

[https://wikileaks.org/gifiles/docs/36/369911\\_-os-us-iraq-blackwater-s-earlier-scandals-coalition.html](https://wikileaks.org/gifiles/docs/36/369911_-os-us-iraq-blackwater-s-earlier-scandals-coalition.html)

Faulkner, C. M., Lambert, J. E., & Powell, J. M. (2019). Reassessing private military and security company (PMSC) 'competition' in civil war: Lessons from Sierra Leone. *Small Wars & Insurgencies*, 30(3), 641-659. <https://doi.org/10.1080/09592318.2019.1601869>

Fitzsimmons, S. (2015). *Private Security Companies during the Iraq War Military Performance and the Use of Deadly Force (First ed.)*. N.p.: Routledge.

Gershkoff, A., & Kushner, S. (2005). Shaping Public Opinion: The 9/11-Iraq Connection in the Bush Administration's Rhetoric. *Perspectives on Politics*, 3(3), 525-537.

Glanz, J. (2007, February 1). U.S. Agency Finds New Waste and Fraud in Iraqi Rebuilding Projects (Published 2007). *The New York Times*.

[https://www.nytimes.com/2007/02/01/world/middleeast/01reconstruction.html?\\_r=1&scp=47&sq=dyncorp+international&st=nyt](https://www.nytimes.com/2007/02/01/world/middleeast/01reconstruction.html?_r=1&scp=47&sq=dyncorp+international&st=nyt)

*H.J.Res. 114 (107th): Authorization for Use of Military Force Against ... -- Senate Vote #237 -- Oct 11, 2002*. (2002, October 11). GovTrack.us. Retrieved December 14, 2021, from

<https://www.govtrack.us/congress/votes/107-2002/s237>

Halliburton and Private Military Contractors Strike it Rich in Iraq. (2003, December 12). *Democracy Now!*

[https://www.democracynow.org/2003/12/12/halliburton\\_and\\_private\\_military\\_contractors\\_strike](https://www.democracynow.org/2003/12/12/halliburton_and_private_military_contractors_strike)

Hammer, B. (2007, August 30). Triple Canopy gets new contract for Iraq security - Washington Business Journal. *The Business Journals*.

<https://www.bizjournals.com/washington/stories/2007/08/27/daily34.html>

Hidalgo Capitan, A. L. (2007). *El sistema económico mundial y la gobernanza global: Una teoría de la autorregulación de la economía mundial*. Eumed.net. <http://site.ebrary.com/id/10565812> (

Higgins, A. G. (2007). US rejects UN mercenary report. *USA Today*.

[https://web.archive.org/web/20120630165026/http://www.usatoday.com/news/world/2007-10-17-3392316246\\_x.htm](https://web.archive.org/web/20120630165026/http://www.usatoday.com/news/world/2007-10-17-3392316246_x.htm)

Home. Retrieved December 18, 2021, from <https://www.halliburton.com/>



[Howlett, C. F. \(2003\). \*Studying America's Struggle against War: An Historical Perspective\*. N.p.: Society for History Education. \(Howlett, 2003\)](#)

ICRC. (2020, June 11). *The Montreux Document on Private Military and Security Companies*. International Committee of the Red Cross. Retrieved February 16, 2022, from <https://www.icrc.org/en/publication/0996-montreux-document-private-military-and-security-companies>

Iraq Relief and Reconstruction Fund. (2003). Major Project Contractors . In *APPENDIX 3*. Retrieved from [https://obamawhitehouse.archives.gov/sites/default/files/omb/assets/omb/legislative/2207\\_appx3.pdf](https://obamawhitehouse.archives.gov/sites/default/files/omb/assets/omb/legislative/2207_appx3.pdf) (

Isenberg, D. (2004). *A Fistful of Contractors: The Case for a Pragmatic Assessment of Private Military Companies in Iraq*. GSDRC. Retrieved December 19, 2021, from <https://gsdrc.org/document-library/a-fistful-of-contractors-the-case-for-a-pragmatic-assessment-of-private-military-companies-in-iraq/>

Isenberg, D. (2009). *Shadow Force: Private Security Contractors in Iraq*. ABC-CLIO.

Jarle Hansen, S. (2012). International Interventions, State-Building and Democratization: Justifying the Role of the Private Security Companies in Somalia? *African Security*, 5(3-4), 255-266. <https://doi.org/10.1080/19392206.2012.732897>

Kelley, M. (2005). Lies in Iraq shooting unpunished. *USA Today*. [https://usatoday30.usatoday.com/printedition/news/20090402/1ablackwater02\\_st.art.htm](https://usatoday30.usatoday.com/printedition/news/20090402/1ablackwater02_st.art.htm)

KENNEDY,, C., HATLEY, N., LAU, A., MERCER, A., KEETER, S., FERNO, J., & ASARE-MARFO, D. (2008, March 19). *Public Attitudes Toward the War in Iraq: 2003-2008*. Pew Research Center. Retrieved December 17, 2021, from <https://www.pewresearch.org/2008/03/19/public-attitudes-toward-the-war-in-iraq-20032008/>

Kinsey, C. (2005). Challenging international law: A dilemma of private security companies: Analysis. *Conflict, Security & Development*, 5(3), 269-293. <https://doi.org/10.1080/14678800500344515>

Klein, A., & Fainaru, S. (2007). *Firms Protest Exclusion From Iraq Security Bid*. Washington Post. [https://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2007/05/04/AR2007050402113\\_pf.html](https://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2007/05/04/AR2007050402113_pf.html)

Krahmann, E. (2003). Conceptualizing Security Governance. *COOPERATION AND CONFLICT*, 22.

Lawrence, Q. (2019, January 16). *Veterans Claiming Illness From Burn Pits Lose Court Fight*. NPR. Retrieved December 19, 2021, from <https://www.npr.org/2019/01/16/685657005/veterans-claiming-illness-from-burn-pits-lose-court-fight>

- Leander, A. (2005). The Market for Force and Public Security: The Destabilizing Consequences of Private Military Companies. *Journal of Peace Research*, 42(5).  
<https://doi.org/10.1177/0022343305056237>
- Lejeune, C. (2009, February 27). La retirada anunciada por Obama dejará hasta 50.000 soldados en Irak. *EL PAÍS*. [https://elpais.com/internacional/2009/02/27/actualidad/1235689209\\_850215.html](https://elpais.com/internacional/2009/02/27/actualidad/1235689209_850215.html)
- Luna, M. M., & Castro, V. A. (2020). *La agenda internacional de paz y seguridad en el siglo XXI: ¿nuevas amenazas, nuevas guerras?* 24.
- Martin, J. (2004). Custer Battles marks successful year securing Baghdad International Airport. *Custer Battles LLC*.  
<https://web.archive.org/web/20050213214526/http://www.custerbattles.com/press/pr063004.html>
- Mason, R. C. (s. f.). *Status of Forces Agreement (SOFA): What Is It, and How Has It Been Utilized?* 34. *MEJA Expansion and Enforcement Act of 2007 (2007; 110th Congress HR 2740)*. (n.d.). GovTrack.us. Retrieved December 14, 2021, from <https://www.govtrack.us/congress/bills/110/hr2740>
- Merle, R. (2006). Census Counts 100,000 Contractors in Iraq. *Washington Post Staff Writer*.  
<https://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2006/12/04/AR2006120401311.html>
- Myers, L. (2005, February 15). *US contractors in Iraq allege abuses*. NBC News. Retrieved December 19, 2021, from <https://www.nbcnews.com/id/wbna6947745>
- Office of the Press Secretary. (2007, January 10). *President's Address to the Nation*. Bush White House Archives. Retrieved December 18, 2021, from <https://georgewbush-whitehouse.archives.gov/news/releases/2007/01/20070110-7.html>
- Østensen, Å. G. (2011). *UN Use of Private Military and Security Companies*. 84.
- Palmer, J. (2018). *War For Sale: The Case of Blackwater Unaccountable Private Military Companies in Iraq and Afghanistan*. 54.
- Peters, H. M. (2021). *Defense Primer: Department of Defense Contractors*. 3.
- Petersohn, U. (2017). Private Military and Security Companies (PMSCs), Military Effectiveness, and Conflict Severity in Weak States, 1990–2007. *Journal of Conflict Resolution*, 61(5).  
<https://doi.org/10.1177/0022002715600758>
- President's Address to the Nation*. (2007, January 10). Bush White House Archives. Retrieved December 14, 2021, from <https://georgewbush-whitehouse.archives.gov/news/releases/2007/01/20070110-7.html>
- Price, D. (2007). *MEJA Expansion and Enforcement Act of 2007 (2007; 110th Congress HR 2740)*. GovTrack.us. Retrieved December 18, 2021, from <https://www.govtrack.us/congress/bills/110/hr2740>

- Richemond, D. (2007). *The New Peacekeepers? Private Military Companies and the Future of Peacekeeping Operations*. 11.
- Risen, J. (2007, September 27). Blackwater Tops Firms in Iraq in Shooting Rate. *The New York Times*.  
<https://www.nytimes.com/2007/09/27/world/middleeast/27contractor.html>
- Rodban, M. (2009). *A Thesis submitted to the Faculty of the Graduate School of Arts and Sciences of Georgetown University in partial fulfillment of the requirements for the degree of Master of Arts in Security Studies*. 59.
- Royal Norwegian Naval Academy, & Østensen, Å. G. (2011). *UN Use of Private Military and Security Companies*. Ubiquity Press. <https://doi.org/10.5334/bbn>
- Schmidt, B. C., & Williams, M. C. (2008). The Bush Doctrine and the Iraq War: Neoconservatives Versus Realists. *Security Studies*, 17(2), 191-220. <https://doi.org/10.1080/09636410802098990>
- Schneider, M. (2012, December 30). *American Public Opinion on the Iraq War*. American Diplomacy. Retrieved December 17, 2021, from <https://americandiplomacy.web.unc.edu/2012/12/american-public-opinion-on-the-iraq-war/>
- Schreier, F., & Caparini, M. (2005). Privatising Security. *Private Military and Security Companies*, 184.
- Schwartz, M. (2011). *The Department of Defense's Use of Private Security Contractors in Afghanistan and Iraq*. 27.
- Serrano, P. P., & Martín, L. H. (2007). *EL MARCO JURÍDICO DE LAS CMSP. REFLEXIONES A PROPÓSITO DE LA EXPERIENCIA EN IRAK*. 38.
- Singer, P. W. (2003). *Corporate Warriors The Rise of the Privatized Military Industry and Its Ramifications for International Security*.
- Singer, P. W. (2007, October 2). The Dark Truth about Blackwater. *Brookings Institution*.  
<https://www.brookings.edu/articles/the-dark-truth-about-blackwater/>
- Spearin, C. (2001). Private security companies and humanitarians: A corporate solution to securing humanitarian spaces? *International Peacekeeping*, 8(1), 20-43.  
<https://doi.org/10.1080/13533310108413877>
- Spearin, C. (2005). Between public peacekeepers and private forces: Can there be a third way? *International Peacekeeping*, 12(2), 240-252. <https://doi.org/10.1080/13533310500066529>
- Statement of Administration Policy: HR 2740 - MEJA Expansion and Enforcement Act of 2007 | The American Presidency Project*. (2007, October 3). The American Presidency Project. Retrieved December 14, 2021, from <https://www.presidency.ucsb.edu/documents/statement-administration-policy-hr-2740-meja-expansion-and-enforcement-act-2007>
- Taylor, T. (2011). Private security companies in Iraq and beyond. *International Affairs*, 87(2), 445-456.  
<https://doi.org/10.1111/j.1468-2346.2011.00982.x>

- Teather, D. (2004). Halliburton suspends bill for army meals | World news. *The Guardian*.  
<https://www.theguardian.com/world/2004/feb/18/iraq.usa>
- Teather, D. (2004, February 17). *Halliburton suspends bill for army meals* | World news. The Guardian.  
<https://www.theguardian.com/world/2004/feb/18/iraq.usa> (Teather, 2004)
- Tkach, B. (2019). Private military and security companies, contract structure, market competition, and violence in Iraq. *Conflict Management and Peace Science*, 36(3), 291-311.  
<https://doi.org/10.1177/0738894217702516>
- Tucker (2005). "A Web of Truth: Whistle-Blower or Troublemaker, Bunny Greenhouse Isn't Backing Down". Washington Post.
- Washington Post. (2007). Iraq Contractors Face Growing Parallel War.  
[https://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2007/06/15/AR2007061502602\\_2.html?hpid=topnews](https://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2007/06/15/AR2007061502602_2.html?hpid=topnews)
- Wood, C. (2013, March 21). *Private Military Companies and International Security*. E-International Relations. Retrieved December 14, 2021, from <https://www.e-ir.info/2013/03/21/private-military-companies-and-international-security/>
- Zarco, L. A. G. (2012). *ANÁLISIS DEL ROL DE LAS EMPRESAS MILITARES Y DE SEGURIDAD PRIVADA. ESTUDIO DE CASO: GUERRA EN IRAK 2003-2010*. 59.